

Leyes punitivas de drogas: 10 años socavando las Reglas de Bangkok

Autores: Adrià Cots Fernández and Marie Nougier¹



1. Introducción: Reformar las leyes de drogas para cumplir las Reglas de Bangkok

El 21 de diciembre de 2020 se cumplieron 10 años desde que 193 Estados adoptaron las Reglas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de las Reclusas y Medidas No Privativas de la Libertad para las Mujeres Delinquentes (“Reglas de Bangkok” o “las Reglas”)². Durante siglos, las leyes penales y los sistemas carcelarios han sido diseñados por y para hombres³. Las Reglas de Bangkok constituyen los primeros estándares internacionales de derechos humanos que se enfocan en las necesidades y experiencias específicas de mujeres privadas de su libertad⁴.

Las Reglas de Bangkok son el conjunto de estándares mínimos que cualquier país debería implementar para proteger la vida, la salud y los derechos de las mujeres que encarcela, o que de algún modo están sujetas a una medida penal no privativas de la libertad. Habiendo dicho esto, incluso en las mejores condiciones una prisión no es un entorno apropiado para abordar las causas por las cuales las mujeres se ven involucradas en mercado ilegal de drogas, o para cumplir el propósito de rehabilitación del sistema de justicia. Más aún: el sistema de justicia penal se encuentra inherentemente parcializado contra quienes carecen de dinero y de redes de apoyo, al mismo tiempo que se ha demostrado que la legislación sobre drogas está desproporcionadamente dirigida contra personas marginalizadas en función de su raza, etnicidad, orientación sexual e identidad de género. Por ello, las Reglas de Bangkok deben ser interpretadas e implementadas como parte de un esfuerzo más amplio para reducir las poblaciones carcelarias en todo el mundo.

Las Reglas de Bangkok no constituyen un acuerdo vinculante, y no tienen un efecto legal directo sobre las legislaciones nacionales. Pero en tanto que una resolución de la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptada por 193 Estados, representan un enérgico

compromiso político por parte de todos los países del mundo para reconocer, respetar y cumplir las necesidades específicas de las mujeres privadas de su libertad^{5,6}.

Durante las últimas décadas, las leyes referidas a drogas fueron cambiadas para establecer sanciones penales desproporcionadas para delitos relacionados con drogas, contribuyendo de esta manera a un crecimiento súbito y sin precedentes del número de mujeres encarceladas en todo el mundo. Políticas punitivas referidas a drogas tales como el uso desproporcionado de la prisión preventiva, sentencias mínimas obligatorias de prisión, y la escasez de servicios para reducción de daños y de tratamiento basado en evidencias en las prisiones, han ignorado consistentemente las necesidades y circunstancias específicas de las mujeres, así como las fehacientes causas para la participación de éstas en los mercados ilegales de drogas, incluyendo la pobreza, responsabilidades de crianza, coerción y traumas. En otras palabras: han socavado la aplicación de las Reglas de Bangkok.

Para defensores en todo el mundo, el décimo aniversario de las Reglas de Bangkok es una oportunidad para que los Estados recuerden que las políticas de igualdad de género, los derechos referidos a la justicia penal, y las leyes sobre drogas no están aislados entre sí. Si los Estados quieren implementar una genuina agenda en favor de la igualdad de género, deben reconsiderar las leyes y políticas que la socavan – incluyendo la legislación referida a drogas.

Este documento informativo ofrece una visión general de las maneras concretas en las cuales la legislación punitiva referida a drogas ha tenido un impacto en el avance logrado por las Reglas de Bangkok, y ofrece varias recomendaciones para alinear las leyes sobre drogas a estas Reglas.

Recuadro 1 Las Reglas de Bangkok y las personas LGBTQI+: El caso de las mujeres trans privadas de su libertad

Una de las principales críticas a las Reglas de Bangkok es que se enfocan exclusivamente en mujeres heterosexuales cis (esto es, mujeres que se identifican con el género que les fue asignado al nacer), y por consiguiente no reconocen las necesidades y circunstancias específicas de mujeres LGBTQI+⁷. Ello resulta particularmente inquietante debido a que, al interior del sistema de justicia, las personas LGBTQI+ son particularmente vulnerables a la invisibilidad, discriminación y abuso que las Reglas de Bangkok buscan abordar.

La situación específica de mujeres trans en prisión puede servir como un ejemplo de cómo las personas que no expresan su identidad en términos binarios resultan impactadas de manera diferenciada por las prisiones y por el sistema de justicia penal. Hay una urgente necesidad de que las Reglas de Bangkok sean complementadas con Reglas adicionales que aborden las necesidades y vulnerabilidades específicas de las mujeres LGBTQI+.

En un estudio reciente⁸ y a través de una comunicación enviada a la Corte Interamericana de Derechos Humanos⁹, varias organizaciones latinoamericanas resaltaban que las mujeres trans privadas de su libertad enfrentan abusos psicológicos y físicos sistemáticos a manos del personal carcelario y de otras personas privadas de su libertad. Las mujeres trans tienen limitado acceso a la prevención, tratamiento y atención de infecciones de transmisión

sexual como el VIH, sífilis y Hepatitis B, a pesar de que ellas reportan una prevalencia particularmente elevada de estas enfermedades. También se identificaron carencias en cuanto al acceso a medicinas para la reasignación de género – para quienes la desean. Más aún: la capacidad de las mujeres trans para elegir la prisión a la cual serían enviadas dependía del criterio del personal penitenciario.

Antes de entrar en contacto con el sistema de justicia penal, las mujeres trans en América Latina a menudo deben enfrentar diversas situaciones de vulnerabilidad en términos de vivienda, empleo en el sector informal, abuso y maltrato, y son blanco de por parte de las fuerzas del orden. Similares situaciones fueron reportadas por trabajadoras sexuales transgénero que consumen drogas durante un taller realizado en Pattaya, Tailandia, en octubre de 2020¹⁰.

En diciembre de 2020, algunas de las organizaciones que respaldan este estudio firmaron la primera declaración sobre los derechos de las mujeres trans privadas de su libertad en América Latina¹¹. Sus principales exigencias se enfocan en la necesidad de priorizar alternativas a la prisión y castigo, y velar para que las autoridades reconozcan y tomen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres trans en prisión. Al hacerlo, la declaración se ciñe de manera muy rigurosa a las políticas y áreas prioritarias establecidas en las Reglas de Bangkok.

Medidas no privativas de la libertad

REGLA 57

"Se deberán elaborar medidas opcionales y **alternativas a la prisión preventiva y la condena**, concebidas específicamente para las mujeres delinquentes, teniendo presente el historial de **victimización** de muchas de ellas y sus responsabilidades de cuidado de los hijos."

- Los países deben establecer **alternativas a la prisión** que tengan en cuenta **las razones** por las que las mujeres se ven involucradas en los mercados ilegales de drogas.

Incluyendo: la intersección entre pobreza y las responsabilidades de cuidado, la violencia de género, la coacción o influencia de un pariente o compañero masculino, o la drogodependencia.



REGLA 58

"No se separará a las mujeres de sus parientes y comunidades sin prestar la debida atención a su historial y sus vínculos familiares. Cuando proceda y sea posible, se utilizarán mecanismos opcionales en el caso de las mujeres que cometan delitos, como medidas alternativas y otras que **sustituyan a la prisión preventiva y la condena**."

- **Abolir la prisión preventiva obligatoria** para los delitos de drogas.
- Abolirlas leyes que **excluyen a las personas condenadas por delitos de drogas de las alternativas a la prisión**.
- Reformar las leyes que **priorizan o facilitan la prisión preventiva** por delitos de drogas.
- Proporcionar **asesoramiento legal y apoyo** a las mujeres acusadas por delitos de drogas en los procesos de prisión preventiva.



REGLA 60

"Se preverán recursos apropiados a fin de elaborar opciones satisfactorias para las delinquentes, en las que se conjuguen las medidas no privativas de la libertad con **intervenciones destinadas a resolver los problemas más habituales** por los que las mujeres se ven sometidas al sistema de justicia penal."

- Resolver la falta de inversión histórica en servicios de apoyo específicos de género para mujeres involucradas en actividades ilegales de drogas.



Un enfoque centrado en la salud

REGLA 15

"Los servicios sanitarios de las prisiones deberán suministrar o facilitar **programas de tratamiento especializado para las consumidoras de drogas**, teniendo en cuenta su posible **victimización anterior**, las necesidades especiales de las mujeres embarazadas y las mujeres con hijos y la diversidad de sus respectivos contextos culturales."

- **Abolir el tratamiento obligatorio para la drogodependencia**, dentro y fuera de las prisiones.
- Garantizar el acceso a **servicios de tratamiento y reducción de daños de género, voluntarios, y basados en la evidencia**.
- Introducir en las prisiones **servicios de drogas sólo para mujeres**, que den respuesta a las necesidades y a las modalidades de uso de las mujeres.



REGLA 62

"Se deberá mejorar la prestación de servicios comunitarios de tratamiento del consumo de drogas que **tengan presentes las cuestiones de género, habilitados para el tratamiento de los traumas y destinados sólo a las mujeres**, así como el acceso de estas a dicho tratamiento, a efectos de la prevención del delito y de la adopción de medidas alternativas a la condena."

- En las medidas alternativas a la prisión, el tratamiento debe ser estrictamente **voluntario y incondicional**. La terminación o discontinuación del tratamiento no puede ser objeto de castigo o encarcelación.
- En las medidas alternativas a la prisión, el tratamiento debe ser **basado en evidencia, específico de género, e informado sobre el trauma**.



Circunstancias atenuantes

REGLA 61

"Al condenar a las delinquentes, **los tribunales tendrán la facultad de examinar atenuantes**, como la ausencia de historial penal y la levedad relativa y el carácter de su comportamiento delictivo, teniendo en cuenta las responsabilidades maternas de las interesadas y sus **antecedentes característicos**."

- **Abolir las penas de prisión obligatorias** para delitos de drogas.
- Reformar las leyes que clasifican como delitos graves todas las actividades ilegales de drogas.
- Considerar **circunstancias atenuantes** en casos de drogas.
- Introducir **atenuantes de género** que reflejen las vías de acceso de las mujeres a los mercados de drogas.



Consideración especial de las mujeres embarazadas, lactantes, o a cargo de niños

REGLA 15

“Los servicios sanitarios de las prisiones deberán suministrar o facilitar programas de tratamiento especializado para las consumidoras de drogas, teniendo en cuenta su posible victimización anterior, **las necesidades especiales de las mujeres embarazadas y las mujeres con hijos** y la diversidad de sus respectivos contextos culturales.”

- Asegurar el acceso a servicios de tratamiento y reducción de daños **estrictamente voluntarios**, y ajustados a las **necesidades de las mujeres embarazadas que usan drogas**.
- Las mujeres **no deben ser castigadas o criminalizadas por usar drogas**. Tampoco cuando están embarazadas, lactantes, o tienen dependientes a su cargo.



REGLA 64

“Cuando sea posible y apropiado **se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas y las mujeres que tengan hijos a cargo**, y se estudiará imponer sentencias privativas de la libertad si el delito es grave o violento o si la mujer representa un peligro permanente, pero **teniendo presentes los intereses superiores del hijo o los hijos** y velando por que se adopten disposiciones apropiadas para el cuidado de esos hijos.”

- **Reformar las leyes** para que las mujeres acusadas de delitos de drogas que están embarazadas, lactantes, o tienen niños a su cargo, **tengan por defecto acceso a alternativas a la prisión**.
- La prisión para las mujeres en estas circunstancias **debe ser una medida excepcional**.



Apoyar a las mujeres al salir de prisión

REGLA 45

“Las autoridades penitenciarias brindarán en la mayor medida posible a las reclusas opciones como la visita al hogar, prisiones abiertas, albergues de transición y programas y servicios de base comunitaria, a fin de **facilitar a su paso de la cárcel a la libertad, reducir la estigmatización y restablecer lo antes posible su contacto con sus familiares**.”

- **Facilitar la transición de las mujeres de la prisión a la comunidad**, mediante medidas de desinstitucionalización gradual que les permitan garantizar **ingresos**, acceder a vivienda, y restaurar los lazos con sus **familias y comunidades**.



REGLA 46

“Las autoridades penitenciarias, en cooperación con los servicios de libertad condicional y de asistencia social, los grupos comunitarios locales y las ONG, elaborarán y ejecutarán **programas de reinserción amplios para el período anterior y posterior a la puesta en libertad**, en los que se tengan en cuenta las **necesidades específicas de las mujeres**.”

- Reformar leyes y políticas para que las personas condenadas por delitos de drogas, o que usan drogas, **no queden excluidas de acceso a la vivienda protegida**, y a otras prestaciones sociales.
- Crear **programas específicos para mujeres previamente encarceladas**, que coordinen todas las ramas del gobierno, desde los juzgados a los servicios de vivienda, salud o empleo.



Mujeres extranjeras detenidas por delitos de drogas

REGLA 53.1

“Cuando existan acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, **se estudiará la posibilidad de trasladar lo antes posible a las reclusas extranjeras no residentes a su país de origen**, en particular si tienen hijos en él, y en caso de que las interesadas **lo soliciten o consientan informadamente en ello**.”

- Garantizar que las mujeres extranjeras detenidas por delitos de drogas tengan **acceso a servicios legales y de apoyo consular** desde su detención.
- Ofrecer a las mujeres extranjeras condenadas por delitos de drogas **la repatriación estrictamente voluntaria** a su país de origen.
- **Reformar las leyes que contemplan la deportación** de personas extranjeras condenadas por delitos de drogas. Ello es especialmente urgente para las que tienen una familia en el país de acogida.



Este resumen infográfico visual se basa en el reporte **Políticas punitivas de drogas: 10 años socavando las Reglas de Bangkok**, preparado por el Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (DPC), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), Dejusticia, LBH Masyarakat, Penal Reform International, Women and Harm Reduction International Network (WHRIN) y la Oficina de Washington en América Latina (WOLA).

2. Antecedentes: El rol de leyes de drogas en el encarcelamiento de las mujeres

Regla de Bangkok 1. Principio Básico.

A fin de poner en práctica el principio de no discriminación consagrado en el párrafo 6 de las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, se deben tener en cuenta las necesidades especiales de las reclusas en la aplicación de las presentes Reglas. La atención de esas necesidades para lograr en lo sustancial la igualdad entre los sexos no deberá considerarse discriminatoria.

En las últimas décadas, ha crecido alarmantemente el número de mujeres y niñas en prisión, y esta cifra se encuentra actualmente en su punto máximo histórico. Desde el año 2000 al 2020, la población global de mujeres en prisión se incrementó en 59%¹², en una proporción mucho más acelerada que la de la población carcelaria de varones, la cual se estima aumentó en un 20% entre los años 2000 y 2017¹³. Durante este período, este crecimiento se ha concentrado en países en las Américas y en Asia.

La adopción de las Reglas de Bangkok no interrumpió esta tendencia, pese a que las Reglas contienen importantes compromisos referidos a alternativas a la prisión que debían haber llevado a la reducción de las poblaciones penitenciarias. Según la organización *Penal Reform International*, entre los años 2010 y 2020 el número de mujeres y niñas encarceladas se incrementó en 50% en Asia, en 19% en América Central y del Sur, y en 24% en África¹⁴. Significativamente, en Europa este porcentaje decreció en 29%¹⁵.

Las leyes sobre drogas juegan un papel crucial a la hora de explicar esta evolución. Desde que se intensificó la “guerra contra las drogas” en la década de

1970, países en todo el mundo se apresuraron a aprobar leyes especiales referidas a drogas con sanciones extremadamente punitivas, y a promover severas políticas para el control de drogas¹⁶. Por ejemplo, en Bolivia la legislación actual sobre drogas fue adoptada en 1988 –respondiendo a presión de los EE.UU.¹⁷– e incluye penas de hasta 25 años en prisión¹⁸; en Ecuador, la primera ley punitiva fue adoptada en 1991, con sentencias de cárcel de hasta 25 años¹⁹; en el Perú, una ley que contemplaba sanciones similares también fue adoptada en 1991²⁰. La legislación actual sobre drogas de Indonesia, la cual incluye la pena de muerte para el delito de tráfico de drogas, fue adoptada en 1997²¹. Durante la década de 1990 e inicios de la siguiente, una serie de legislaciones draconianas sobre drogas fueron adoptadas en muchos países africanos²².

La intensificación de las sanciones penales para delitos relacionados con drogas ha tenido un impacto directo sobre el número de mujeres encarceladas en todo el mundo. Desde el año 1997, la población carcelaria de mujeres en Indonesia se ha más que quintuplicado²³. En el Perú, el número de mujeres en prisión ha crecido a más del doble desde el año 2000, y para el año 2014, de todas las mujeres que se encontraban encarceladas,

Gráfico 1. Crecimiento de la población de mujeres en prisiones desde el año 2000, por país. Fuente: World Prison Brief, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericano



el 60.6% lo estaban por delitos relacionados con drogas²⁴. En 2017, el 59.9% de las mujeres sentenciadas en el Departamento de Establecimientos Correccionales en las Filipinas habían sido acusadas por delitos relacionados con drogas, en comparación con el 15.10%

de los varones en esa condición²⁵. Considerando la situación global, en 2018 la ONU estimaba que un 35% de las mujeres en prisión en todo el mundo lo estaban por delitos relacionados con drogas, en comparación con un 19% de hombres en la misma condición²⁶.

Recuadro 2 Difundiendo las Reglas de Bangkok entre las mujeres en prisión: La experiencia de la Corporación Humanas en Colombia

Las Reglas de Bangkok sólo se harán efectivas si las mujeres privadas de su libertad son conocedoras de su existencia, y del hecho que sus gobiernos se han comprometido a acatarlas. Teniendo ello en mente, durante estos últimos años Corporación Humanas Colombia, un centro de investigación y acción política feminista que trabaja en temas de derechos humanos, paz, seguridad y acceso a la salud, ha realizado una serie de talleres sobre las Reglas de Bangkok con familiares de mujeres privadas de su libertad, **así como con mujeres que antes estuvieron encarceladas**, con la esperanza de que ellas difundirán tal información al interior de las prisiones. Corporación Humanas también compartió información sobre las Reglas de Bangkok en conferencias de mujeres antes encarceladas, realizadas en Colombia y otros lugares en América Latina.

“Lo primero que viene a la mente cuando lees las Reglas de Bangkok es un asombro total”, dice Claudia Cardona, la psicóloga de Corporación Humanas Colombia que conduce muchos de estos talleres. Para muchas mujeres privadas de su libertad, el hecho de que el gobierno se haya comprometido a acatar una serie de obligaciones respecto a cómo ellas deben ser tratadas resulta absolutamente sorprendente, y difiere brutalmente de su realidad cotidiana.

Aunque las Reglas de Bangkok son desatendidas en términos generales, Claudia Cardona declara que las reglas que causan más extrañeza son aquellas que tienen un sustrato inherente de género – por ejemplo, los compromisos respecto al trato para mujeres embarazadas, el acceso gratuito a toallas sanitarias, o la prohibición de que oficiales varones lleven a cabo registros personales mujeres privadas de la libertad. La Corporación Humanas Colombia trata de abordar algunos de estos vacíos, por ejemplo, facilitando la provisión de copas menstruales en las prisiones.

En el 2020, más de 7,400 mujeres se encontraban detenidas en prisiones en Colombia²⁷ – una cifra que representa un incremento de 136.5% desde el año 2000. Aproximadamente un 46% de estas mujeres están encarceladas por un delito relacionado con drogas. Desde el inicio de la pandemia de COVID-19, su situación se ha vuelto más dramática que nunca, dado que la respuesta del gobierno a la pandemia ha sido aislar las prisiones respecto a la comunidad. Las visitas externas han sido prohibidas, y los teléfonos públicos para comunicarse con familiares y amigos brillan por su ausencia. En algunos casos se han aplazado los juicios indefinidamente, lo cual deja a las mujeres en situación de prisión preventiva en un limbo judicial.



Buzones y armarios vacíos en la prisión para mujeres abandonadas en Chang Mai, Tailandia, en 2014
Crédito: Drburtoni | Flickr Drburtoni | CC BY-NC-ND 2.0

3. Cómo las políticas de drogas socavan las Reglas de Bangkok

3.1. Leyes de drogas que socavan el uso de medidas no privativas de la libertad

Regla de Bangkok 57

Las disposiciones de las Reglas de Tokio servirán de orientación para la elaboración y puesta en práctica de respuestas apropiadas ante la delincuencia femenina. En el marco de los ordenamientos jurídicos de los Estados Miembros, se deberán elaborar medidas opcionales y alternativas a la prisión preventiva y la condena, concebidas específicamente para las mujeres delincuentes, teniendo presente el historial de victimización de muchas de ellas y sus responsabilidades de cuidado de hijos.

Regla de Bangkok 58

Teniendo en cuenta las disposiciones del párrafo 2.3 de las Reglas de Tokio, no se separará a las delincuentes de sus parientes y comunidades sin prestar la debida atención a su historial y sus vínculos familiares. Cuando proceda y sea posible, se utilizarán mecanismos opcionales en el caso de las mujeres que cometan delitos, como medidas alternativas y otras que sustituyan a la prisión preventiva y la condena.

Regla de Bangkok 60

Se preverán recursos apropiados a fin de elaborar opciones satisfactorias para las delincuentes, en las que se conjuguen las medidas no privativas de la libertad con intervenciones destinadas a resolver los problemas más habituales por los que las mujeres se ven sometidas al sistema de justicia penal. Entre ellas podrán figurar cursos terapéuticos y orientación para las víctimas de violencia en el hogar y maltrato sexual, tratamiento adecuado para las que sufran discapacidad mental y programas de educación y capacitación para aumentar sus posibilidades de empleo. En esos programas se tendrá presente la necesidad de establecer servicios de atención a niños y otros destinados exclusivamente a la mujer.

Las Reglas de Bangkok se componen de un conjunto de 70 reglas acerca del trato de mujeres encarceladas, tanto antes como después de la determinación de sentencias. Las Reglas se dividen en cuatro bloques; primero, reglas aplicables a todas las mujeres privadas de su libertad; segundo, reglas aplicables a mujeres en ciertas situaciones o que pertenecen a ciertas comunidades, como mujeres embarazadas o indígenas; tercero, reglas sobre medidas no privativas de la libertad; y cuarto, reglas referidas a la necesidad de incrementar la investigación, evaluación y conciencia del público sobre la situación de mujeres en prisión.

Las legislaciones sobre drogas se solapan con las Reglas de Bangkok de muchas maneras. En este documento informativo nos enfocamos en seis áreas clave de las Reglas de Bangkok, y analizamos cómo las políticas referidas a drogas han contribuido al cumplimiento de las Reglas, o han socavado su aplicación.

Al suscribir las Reglas de Bangkok, los Estados se comprometieron a promover medidas de no privativas de la libertad y alternativas a la prisión para mujeres, dado que las Reglas brindan una perspectiva sensible al género que complementa las Reglas Mínimas de las Naciones Unidas sobre las Medidas no Privativas de la Libertad (las Reglas de Tokio)²⁸. Sin embargo, este objetivo ha sido socavado por leyes de drogas que automáticamente categorizan como graves un amplio espectro de delitos relacionados con drogas, priorizan la

prisión preventiva, o establecen sentencias mínimas de prisión muy elevadas para delitos relacionados con drogas. Dado que los delitos relacionados con drogas constituyen una de las razones principales por las que las mujeres se ven involucradas en la justicia penal, estas leyes severas impactan de manera desproporcionada a las mujeres.

El compromiso para promover medidas alternativas a la prisión se encuentra bien justificado en la evidencia científica. Las mujeres entran en contacto con el sistema de justicia penal debido a “múltiples niveles de discriminación y carencias”²⁹, incluyendo la pobreza, falta de educación³⁰, y el abuso físico y mental³¹ perpetrado por cónyuges y familiares. Tal como lo reconoce la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD)³², las prisiones no son un entorno apropiado para abordar los factores que llevan a las mujeres a verse involucradas en el sistema penal, que van desde la falta de empleo hasta cuestiones vinculadas a la salud mental o a la drogodependencia, entre muchos otros. Más aún: muchas mujeres que se encuentran en prisión son infractoras primerizas, o han sido condenadas por un delito no violento. Su encarcelamiento no se encuentra justificado por ningún riesgo concebible que puedan suponer para el bienestar público ni para otras personas. El bienestar de la comunidad se atiende mejor abordando las razones por las que estas mujeres entran en contacto con el sistema de justicia fuera de la prisión³³.



Mujeres privadas de la libertad en Támara, Honduras, en 2017

Crédito: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Proner / Farpa | Flickr Cidh | CC BY 2.0

La mayoría de las mujeres involucradas en las economías de drogas ilegales coinciden cabalmente con esta descripción. En la mayoría de los casos, las mujeres son encarceladas por llevar a cabo actividades relacionadas con drogas de poca entidad, como el transporte de estas sustancias. Estas actividades se caracterizan por ser de alto riesgo y de muy reducida compensación financiera,³⁴ y las personas que se ven involucradas en ellas son prescindibles y fácilmente reemplazadas dentro de las organizaciones de drogas. Algunas mujeres se involucran en el tráfico ilegal de drogas como resultado de la coerción; bajo la influencia de sus parejas y familiares³⁵; o para obtener un ingreso para ellas mismas, sus hijos u otros dependientes³⁶. En la mayoría de los casos, estas mujeres han sido excluidas de los servicios de protección y apoyo básicos que deberían ser brindados por el Estado³⁷. Estas vulnerabilidades cruzadas se complican cuando las mujeres son detenidas y juzgadas en un país extranjero³⁸.

La legislación punitiva referida a drogas ha jugado un papel fundamental en todo el mundo para excluir a las mujeres de alternativas a la prisión, en la ley o en la práctica. Mientras que en Alemania, Inglaterra o Gales, la mayoría de las mujeres condenadas por delitos relacionados con drogas reciben condenas no privativas de la libertad, en otras jurisdicciones la realidad es muy distinta³⁹. En las Filipinas⁴⁰, las leyes sobre drogas explícitamente excluyen la posibilidad de medidas alternativas a la prisión para personas que condenadas por delitos de drogas, sin importar la gravedad de la acción en sí. En México, los delitos referidos a drogas son automáticamente categorizados como “graves” y, en consecuencia, no son elegibles para ninguna alternativa al encarcelamiento. En Indonesia, las personas

sentenciadas a más de 5 años de prisión por un delito referido a drogas, lo cual aplica a quienes están implicadas en la venta de drogas, sólo pueden acceder a alternativas a la prisión si las autoridades les otorgan la condición de “colaboradores de la justicia”, lo cual implica que deben brindar información valiosa a las fuerzas del orden – cosa improbable para quienes se encuentran en los niveles más bajos de la economía de estas sustancias. En otras jurisdicciones, aunque en la ley existe la posibilidad de alternativas a la prisión, sólo un número extremadamente reducido de mujeres condenadas por delitos relacionados con drogas se benefician de esta figura (por ejemplo, un 4% en Rusia, según informes del año 2020)⁴¹.

El caso de la prisión preventiva

Las devastadoras consecuencias de excluir los delitos relacionados con drogas de las alternativas a la prisión resultan especialmente evidentes en el caso de la prisión preventiva. Aún cuando la prisión preventiva debería ser una medida cautelar y excepcional, se estima que el 30% de la población carcelaria a nivel mundial se encuentra detenida a la espera del juicio⁴². En muchos países ese porcentaje es mayor, como en Uruguay (71.2% en 2018), Camboya (72% en 2018), Argentina (59.4% en 2017) o Brasil (45% en 2016)⁴³. Ésta es una tendencia creciente en muchos países – en los EE.UU., el número de personas en prisión preventiva casi se ha duplicado entre 1995 y 2016, aunque el número de personas declaradas culpables por los delitos se mantuvo estable⁴⁴.

Además de la privación concreta de la libertad, la prisión preventiva tiene un severo impacto sobre las vidas

de las mujeres acusadas de delitos relacionados con drogas, desde resultar en peores sentencias hasta situaciones de trauma, violencia y abuso dentro de la prisión, separación de la familia, y pérdida del empleo⁴⁵.

En varios países, las leyes sobre drogas establecen la prisión preventiva obligatoria para delitos relacionados con drogas – tal es el caso en México, Guatemala o las Filipinas⁴⁶. En otras jurisdicciones, la prisión preventiva no es obligatoria en casos de actividades relacionadas con drogas, pero ésta es priorizada por leyes y políticas severas referidas a estas sustancias. En la India, la legislación sobre drogas estipula que los jueces deben rechazar el pago de fianza para personas acusadas por delitos de drogas, a menos que la persona acusada haya acreditado claramente su inocencia al inicio del procedimiento judicial; en casi todos los casos, ello resulta en la imposición de prisión provisional⁴⁷. Aunque no sea obligatoria, la investigación ha mostrado que en la práctica la prisión preventiva es ampliamente usada para personas acusadas por delitos relacionados con drogas en Argentina, Chile, Costa Rica, Ecuador y Uruguay⁴⁸. Una encuesta a 277 mujeres acusadas por delitos relacionados con drogas en Indonesia, publicada en 2019 por LBH Masyarakat, mostraba que no se había concedido libertad provisional a ninguna de ellas⁴⁹. Los períodos de prisión preventiva varían a través del mundo, pero los promedios nacionales pueden ser tan prolongados como 211 días en Costa Rica⁵⁰, o varios años en Nigeria⁵¹ o Camboya.⁵²

Las mujeres sufren un impacto desproporcionado por el excesivo uso de la prisión preventiva para delitos relacionados con drogas. Según datos recogidos por WOLA, en muchos países en América Latina el porcentaje de mujeres encarceladas en situación de prisión preventiva excede el de hombres (59.4% versus 44.3% en Argentina, 53.5% versus 33.8% en México)⁵³. En Camboya, cerca de la mitad de las mujeres embarazadas o que acaban de ser madres y se encuentran en prisión, están en situación de prisión preventiva⁵⁴. La mayoría de las mujeres detenidas a la espera de juicio en el Sudeste Asiático lo están por delitos relacionados con drogas⁵⁵, en un porcentaje mucho mayor que el de hombres en esta misma condición⁵⁶.

Para muchas mujeres, la preferencia del sistema de justicia penal por la prisión preventiva en casos de drogas se ve exacerbada por la pobreza. La mayoría de las mujeres acusadas por delitos relacionados con drogas se ven de pronto sin recursos, aisladas de sus familias, parejas y redes de apoyo, sin representación legal, e incapaces de costear el pago de la fianza⁵⁷. En muchos casos, las mujeres en situación de prisión preventiva no son conscientes de su derecho a obtener libertad bajo fianza, o de acceder a asistencia y representación legal⁵⁸. Además de restringir la prisión provisional a casos excepcionales, los Estados deben abordar el impacto de la pobreza en términos de

género, brindando a las mujeres que enfrentan una situación de prisión preventiva la asesoría y apoyo legales adecuados.

Medidas no privativas de la libertad con perspectiva de género

El objetivo fundamental de las medidas no privativas de la libertad es facilitar la reintegración social de una persona involucrada con la justicia penal, al mismo tiempo que se evita recurrir a la prisión⁵⁹. Pero con frecuencia las medidas no privativas de la libertad que no atienden criterios de género resultan inadecuadas, porque no abordan las causas que llevan a las mujeres a incurrir en actividades ilegales, y porque las mujeres pobres o marginalizadas pueden no ser capaces de costear multas o fianzas, ni tienen acceso a una vivienda⁶⁰. En algunos casos, las condiciones estipuladas en las medidas no privativas de la libertad no son compatibles con las cargas asumidas por las mujeres que son cuidadoras y fuentes de ingreso familiar⁶¹.

Pese a ello, la mayoría de los países ha incumplido con el compromiso de incluir en su legislación alternativas a la prisión concebidas específicamente para a las mujeres, tal como se comprometieron a hacer en la Regla de Bangkok 57. Donde existen alternativas a la prisión sensibles al género, éstas tienden a enfocarse en los papeles tradicionales de las mujeres como madres y cuidadoras. Una encuesta reciente llevada a cabo por el bufete legal Linklaters por encargo de *Penal Reform International* y el IDPC en 18 jurisdicciones, mostraba que, con la excepción de Costa Rica, los únicos elementos específicos de género considerados en estos instrumentos eran el embarazo y la crianza de niños. A través de reformas legales o decisiones judiciales, Brasil, Camboya y México han introducido recientemente dispositivos específicos de género que se proponen reducir el número de mujeres en prisión, pero estas reformas aún no han resultado en cambios tangibles⁶².

Aunque deben priorizarse las medidas no privativas de la libertad para madres y cuidadoras, los enfoques sensibles al género en las alternativas a la prisión deberían considerar todo el rango de factores específicos que ponen a las mujeres en contacto con la economía ilegal de las drogas. Por ejemplo, el Centro para Determinación de Sentencias Alternativas y Servicios de Empleo en la Ciudad de Nueva York, deriva a las mujeres hacia servicios diseñados para “abordar traumas del pasado y reducir conductas asociadas con actividades criminales” mediante consejería, servicios psiquiátricos, orientación vocacional, y derivación a servicios de capacitación laboral, educación para adultos, tratamiento para el uso de drogas, asistencia legal, y otros⁶³.

3.2. Leyes de drogas que socavan la obligación de considerar circunstancias atenuantes



El equipo de la ONU da un curso de alfabetización en la prisión de Kakwangura en Butembo, República Democrática del Congo. Crédito: MONUSCO, Jutin Vugu Vugu | Flickr Monusco | CC BY-SA 2.0

Regla de Bangkok 61

Al condenar a las delincuentes, los tribunales tendrán la facultad de examinar atenuantes, como la ausencia de historial penal y la levedad relativa y el carácter de su comportamiento delictivo, teniendo en cuenta las responsabilidades maternas de las interesadas y sus antecedentes característicos.

Con la Regla 61, los países se comprometieron a permitir que los tribunales pudiesen considerar factores atenuantes en el proceso de dictar sentencias judiciales para mujeres. Según la ONUDD, los factores atenuantes específicos de género deberían incluir el haber experimentado situaciones de violencia o abuso físico o sexual, el haber estado sujeta a manipulación sistemática, situaciones extremas de pobreza, necesidades de salud mental, y drogodependencia⁶⁴. Los Estados también deberían considerar la introducción de circunstancias atenuantes en función de discapacidades, identidad de género, y para mujeres que pertenecen a minorías raciales y étnicas, incluyendo mujeres indígenas.

“A nivel mundial, un gran número de mujeres infractoras son encarceladas por delitos menores relacionados con drogas, a menudo como resultado de manipulación, coerción y pobreza”.

ONUDD, Comentario sobre las Reglas de Bangkok

Dependiendo de la legislación nacional, la consideración de circunstancias atenuantes en la determinación

de sentencias puede tener una amplia variedad de consecuencias, desde eliminar por completo la responsabilidad penal por ciertas acciones, hasta imponer sanciones no privativas de la libertad en lugar del encarcelamiento, o reducir la duración de la sentencia de prisión.

Sin embargo, las leyes punitivas de drogas han socavado una vez tras otra la aplicación de esta regla. Muchas leyes de drogas contemplan la imposición obligatoria de sentencias mínimas de prisión de larga duración para delitos de drogas de poca entidad, incluyendo la posesión y consumo de estas sustancias, sin considerar circunstancia atenuante alguna. Por ejemplo, en Myanmar la sentencia mínima correspondiente a cualquier delito relacionado con drogas es de cinco años en prisión⁶⁵; en las Filipinas, la pena normal para un delito relacionado con drogas oscila entre 12 y 20 años en prisión⁶⁶; en el Perú, la sanción mínima contemplada para delitos relacionados con drogas puede ser de hasta 25 años de cárcel⁶⁷. Las sentencias de prisión impuestas como resultado de estas leyes

no pueden reducirse en ningún caso, ignorando así las circunstancias particulares y antecedentes de las mujeres halladas culpables, incluso en casos de coerción, abuso doméstico o dependencia de drogas.

Por consiguiente, las sentencias mínimas de prisión para delitos relacionados con drogas son un importante factor que ha contribuido al encarcelamiento masivo de mujeres⁶⁸. Estas sentencias tienen un impacto particular sobre comunidades marginalizadas debido a su raza y etnicidad⁶⁹ así como sobre las mujeres, ya que éstas tienden a involucrarse en actividades de drogas que, aunque son de bajo nivel, son castigadas severamente debido a las sentencias mínimas obligatorias⁷⁰. La evidencia muestra que las sentencias mínimas obligatorias no son efectivas para disuadir la delincuencia – por ejemplo, cuando el estado de Rhode Island en los EE.UU. eliminó las sentencias obligatorias para delitos relacionados con drogas, se redujeron los índices tanto de delincuencia como de población carcelaria⁷¹.

En muchos casos, las sentencias mínimas obligatorias únicamente permiten a la judicatura considerar la cantidad y tipo de drogas a la hora decidir la duración de una condena. Tales leyes son inherentemente injustas, en tanto establecen sanciones penales completamente desconectadas de las circunstancias particulares y la historia de cada persona. Se trata de una respuesta simplista ante una realidad compleja.

La obligación de tomar en cuenta las circunstancias personales de las mujeres al determinar las sentencias también se ve socavada por las leyes de drogas que excluyen automáticamente a todas las personas condenadas por delitos de drogas de beneficios administrativos y judiciales que podrían reducir la duración de sus períodos de prisión, como la libertad anticipada⁷², la libertad bajo palabra, o el derecho a apelar la sentencia o a solicitar indulto⁷³. Un ejemplo claro de ello ha sido la arbitraria exclusión, en algunas jurisdicciones, de personas condenadas por delitos de drogas de mecanismos adoptados para reducir el hacinamiento en las prisiones como consecuencia de la crisis de COVID-19 (ver Recuadro 3).

La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH) ha exhortado la eliminación de las sentencias mínimas obligatorias⁷⁴, y el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha declarado que éstas tienen “mucho mayor probabilidad” de ser extremadamente desproporcionadas⁷⁵. A nivel nacional, regímenes de sentencia mínima obligatoria han sido declarados inconstitucionales en países como India, Sudáfrica, Sri Lanka o Papúa Nueva Guinea⁷⁶.

Recuadro 3 Mujeres y excarcelaciones en tiempos del COVID-19

Los retos sin precedentes impuestos por el COVID-19 han llevado a muchos gobiernos a tomar medidas excepcionales para descongestionar las prisiones. En una declaración conjunta, ONUDD, OMS, ACNUDH y ONUSIDA exhortaron a los gobiernos para que “consideren limitar la privación de la libertad, incluyendo la prisión preventiva, a una medida excepcional, particularmente dada la situación de hacinamiento de las prisiones, y redoblen esfuerzos para recurrir a medidas no privativas de la libertad” con “consideración específica hacia mujeres y menores”⁷⁷. Más aún: la ONUDD alentaba la adopción de “mecanismos de excarcelación” para “prisioneros para quienes el COVID-19 suponga riesgos particulares, ... incluyendo a mujeres embarazadas, mujeres con menores dependientes... y quienes han sido sentenciados por delitos menores”⁷⁸.

Un estudio conducido por *Harm Reduction International* mostraba que entre marzo y junio de 2020, 109 países y territorios habían adoptado medidas tendientes a la descongestión de prisiones orientadas a contener el riesgo de transmisión del COVID-19 en estos establecimientos. Ello incluía la liberación anticipada, a menudo a través de la conmutación de sentencias, indultos, derivaciones a arresto domiciliario, y otorgamiento de libertad bajo fianza o palabra. La nota negativa consistía en que al menos 28 países explícitamente excluían de estas medidas a personas encarceladas por algunos delitos relacionados con drogas.

Las mujeres privadas de su libertad sólo fueron explícitamente priorizadas para medidas de descongestión de establecimientos penales en un 20% de estos países. Ejemplos de países que emprendieron iniciativas específicamente dirigidas a mujeres incluyen al Reino Unido, Ruanda y Zimbabue, los cuales se comprometieron a excarcelar a las mujeres detenidas junto con sus hijos⁷⁹. (Es digno de mención que en el Reino Unido, hacia junio de 2020, únicamente habían sido puestas en libertad 16 de las 70 mujeres que estaban siendo consideradas para este beneficio)⁷⁷. Estas medidas siguen siendo excepcionales, y distan de ser adecuadas para abordar el actual hacinamiento en las prisiones, así como los riesgos de salud para las mujeres privadas de su libertad derivadas del hacinamiento.

Un enfoque a los factores atenuantes con perspectiva de género

Una encuesta realizada en 18 jurisdicciones por Linklaters, por encargo de *Penal Reform International* y el IDPC, mostraba que muy pocos sistemas legales contemplan explícitamente factores atenuantes específicos para mujeres⁸¹. Donde éstos existen, tienden a enfocarse en circunstancias vinculadas al papel que las mujeres cumplen como madres y cuidadoras; tal es el caso en Alemania (para mujeres embarazadas)⁸² y en Rusia (para mujeres embarazadas, o con hijos pequeños).

Un enfoque verdaderamente sensible al género hacia factores atenuantes debería abandonar la omisión formal del género al determinar las sentencias. En su lugar, deberían tenerse en cuenta las causas y motivos singulares que llevan a las mujeres a participar en actividades ilegales relacionadas con drogas, y las consecuencias de su encarcelamiento⁸³. Estos factores deben incluir: antecedentes de violencia de género, participación en actividades ilegales de drogas bajo coerción o influencia de un cónyuge o familiar, antecedentes de dependencia a las drogas y/o de cuestiones de salud mental, y participación en la economía ilegal drogas con el fin de sufragar sus responsabilidades de crianza.

3.3. Leyes de drogas que socavan la provisión de tratamientos de drogas con perspectiva de género

Regla de Bangkok 15

Los servicios sanitarios de las prisiones deberán suministrar o facilitar programas de tratamiento especializado para las consumidoras de drogas, teniendo en cuenta su posible victimización anterior, las necesidades especiales de las mujeres embarazadas y las mujeres con hijos y la diversidad de sus respectivos contextos culturales.

Regla de Bangkok 62

Se deberá mejorar la prestación de servicios comunitarios de tratamiento del consumo de drogas en que se tengan presentes las cuestiones de género, habilitados para el tratamiento de los traumas y destinados exclusivamente a las mujeres, así como el acceso de estas a dicho tratamiento, a efectos de la prevención del delito y de la adopción de medidas alternativas a la condena.



Distribución de materiales de reducción de daños

Crédito: World Bank Photo Collection | Flickr Worldbank | CC BY-NC-ND 2.0

El uso de drogas es muy común en las prisiones de todo el mundo. La ONUDD estima que una de cada tres personas encarceladas en todo el mundo ha usado drogas mientras estaba privada de su libertad⁸⁴, al mismo tiempo que una gran proporción de las mujeres que entran en contacto con el sistema de justicia penal tiene antecedentes de uso de drogas y, en algunos casos, de dependencia⁸⁵. Según la ONU, se estima que el 50% de las mujeres encarceladas han experimentado dependencia a las drogas en el año previo a su encarcelamiento, en contraposición al 30% de los varones en la misma situación⁸⁶. En países como Canadá, el consumo de drogas inyectables es una ocurrencia frecuente entre las mujeres encarceladas, a menudo compartiendo el equipo de inyección⁸⁷.

Las mujeres privadas de su libertad también son más vulnerables que los hombres a daños a la salud, incluyendo daños relacionados con las drogas. La inyección con drogas en condiciones precarias y antihigiénicas puede presentar un alto riesgo de infección por VIH y hepatitis C, así como de sobredosis⁸⁸, mientras que compartir implementos para fumar resulta particularmente riesgoso para la transmisión de virus como el COVID-19. La investigación muestra que en algunos casos existe una fuerte conexión entre salud mental y consumo de drogas entre mujeres en prisión, en ocasiones debido a traumas y abusos anteriores⁸⁹. Para algunas mujeres, el estigma, la violencia estructural y sentimientos internalizados de vergüenza asociada con romper expectativas patriarcales, pueden operar como factores que impulsan el uso de drogas⁹⁰, al

mismo tiempo que como barreras para acceder a servicios referidos a drogas. Por consiguiente, la provisión en prisiones de servicios sensibles al género para el tratamiento de la dependencia a drogas y para la reducción de daños debe ser una prioridad.

Ello es reconocido tanto en las Reglas de Bangkok 15 y 62, como en el Documento Final de la Sesión Especial de la Asamblea General de las Naciones Unidas de 2016 (“UNGASS”, por sus siglas en inglés) sobre drogas, en el cual los Estados se comprometieron a asegurar el acceso a intervenciones orientadas a “reducir al mínimo las consecuencias adversas del uso indebido de drogas para la sociedad y la salud pública, entre ellas, cuando proceda, programas de terapia asistida por medicación, programas relacionados con el equipo de inyección” en prisiones y otros entornos de internamiento⁹¹. Los Estados que incumplen con la obligación de proporcionar estas intervenciones en prisiones violan el derecho a la salud de las personas encarceladas y, en ciertas circunstancias, el derecho de estas personas a la vida y a estar libres de torturas y maltratos⁹². Estos Estados también violan el principio de equivalencia en la atención a la salud, el cual estipula que las mujeres en custodia deben recibir los mismos servicios de salud que en la comunidad, y garantizan la continuidad de la atención de salud entre la comunidad y las prisiones, lo cual es considerado por la OMS como un “componente fundamental de los esfuerzos exitosos por ampliar el tratamiento”⁹³.

Ello no obstante, históricamente los enfoques punitivos hacia el uso de drogas han supuesto que los servicios para reducción de daños estén menos disponibles en las prisiones que en la comunidad⁹⁴, y los servicios de tratamiento para rehabilitación del uso de drogas en prisiones se basan mayormente en la abstinencia. Según datos reportados por *Harm Reduction International*, para el año 2020 había 84 países en todo el mundo que operaban al menos un programa de terapia con agonistas opioides (OAT) en la comunidad, pero solamente 59 lo ofrecían en al menos una de sus prisiones⁹⁵. Los programas para intercambio de agujas y jeringas estaban disponibles en la comunidad en 87 países, pero únicamente 10 países operaban al menos un programa en un entorno carcelario⁹⁶.

Donde existen, los servicios para reducción de daños y el tratamiento de drogas en las prisiones están en la mayoría de los casos únicamente disponibles para varones, y son diseñados, implementados y evaluados sin la participación de mujeres⁹⁷. Ello resulta problemático porque el uso de drogas de las mujeres es distinto al de los varones y responde a distintas causas, y también porque ellas enfrentan diferentes obstáculos para acceder a servicios de salud y de drogas. Un análisis de los servicios para tratamiento referido a

drogas en los sistemas carcelarios en el Sudeste Asiático mostraba que, donde se habían implementado servicios de drogas en la región, éstos eran neutrales en términos de género, y a la práctica enfocados en los varones⁹⁸.

Bajo la Regla de Bangkok 15, los Estados se comprometieron a ofrecer a las mujeres en prisión la posibilidad de recibir tratamiento de drogas voluntario y basado en evidencia, así como servicios para reducción de daños⁹⁹. Estos servicios deberían ser integrados dentro de programas específicos de género que se enfoquen en abordar el trauma y las cuestiones de salud mental, y que promuevan la educación y los servicios de búsqueda de empleo y de vivienda tras la puesta en libertad, entre otros aspectos. Para abordar el estigma asociado al uso de drogas¹⁰⁰, las prisiones deben establecer servicios de fácil acceso, discretos y flexibles.

Pese a que los Estados tienen la obligación de brindar tales servicios, es importante recordar que los entornos penitenciarios no son un espacio óptimo para brindar servicios integrados para tratamiento referido a drogas ni de reducción de daños, del mismo modo que tampoco son el mejor entorno para brindar atención de salud mental y otros servicios de apoyo. Los entornos penitenciarios pueden socavar las intervenciones que buscan abordar el estigma (incluyendo el auto-estigma), así como otros factores asociados con la drogodependencia, incluyendo experiencias de opresión, exclusión o violencia doméstica. Ello resalta la necesidad de brindar alternativas a la prisión para mujeres con antecedentes de uso de drogas.

El tratamiento obligatorio como parte de las medidas no privativas de la libertad

En la Regla de Bangkok 62, los Estados se comprometieron a brindar programas de tratamiento sensibles al género, habilitados para el tratamiento de traumas, y exclusivos para mujeres, en la comunidad y dentro del contexto de alternativas a la prisión. En tal sentido, las Reglas de Bangkok están en claro conflicto con medidas no privativas de la libertad que obligan a las mujeres a empezar un tratamiento de drogas, o en las cuales se ofrece el tratamiento de drogas como la única alternativa posible al encarcelamiento.

En tanto que una intervención médica no consentida, el tratamiento obligatorio referido a drogas es inherentemente degradante, y viola los derechos a la salud¹⁰¹ y a la integridad corporal. Una revisión de estudios cuantitativos sobre la efectividad de tratamientos obligatorios referidos a drogas muestra que éstos no producen mejores resultados en comparación con el tratamiento voluntario, y algunos estudios sugieren consecuencias dañinas asociadas con esta práctica¹⁰².

Para que un tratamiento referido a drogas sea sensible al género y habilitado para el tratamiento de traumas, tiene que ser voluntario y no condicionado. El tratamiento referido a drogas que se ofrece como la única alternativa posible al encarcelamiento no es genuinamente voluntario; lo mismo ocurre con el tratamiento que se puede convertir en un nuevo procesamiento judicial o encarcelamiento si el cliente no llega a cumplirlo, o si empieza a usar drogas otra vez¹⁰³. Las medidas no privativas de la libertad que contemplan tratamiento obligatorio o mediante coerción varían

dependiendo del entorno legal, desde tribunales de drogas¹⁰⁴ hasta la suspensión de la sentencia si se inicia el tratamiento¹⁰⁵. Igualmente, la forma que asume el tratamiento variará de país a país. Estados como Suecia¹⁰⁶, Puerto Rico¹⁰⁷, México¹⁰⁸ o Rusia¹⁰⁹ disponen que las personas emprendan programas basados en la abstinencia o, en algunos casos, se los ordenan, sin que las clientes tengan la oportunidad de elegir el tratamiento que mejor se adapta a sus necesidades. En muchos casos, el tratamiento propuesto carece de un enfoque sensible al género¹¹⁰.

3.4 Considerando las necesidades especiales de mujeres embarazadas, y de mujeres con hijos

Regla de Bangkok 4

En la medida de lo posible, las mujeres serán enviadas a cárceles cercanas a su hogar o sus centros de rehabilitación social, teniendo presentes sus responsabilidades de cuidado de los niños, así como sus preferencias y la disponibilidad de programas y servicios apropiados.

Regla de Bangkok 15

Los servicios sanitarios de las prisiones deberán suministrar o facilitar programas de tratamiento especializado para las consumidoras de drogas, teniendo en cuenta su posible victimización anterior, las necesidades especiales de las mujeres embarazadas y las mujeres con hijos y la diversidad de sus respectivos contextos culturales.

Regla de Bangkok 64

Cuando sea posible y apropiado se preferirá imponer sentencias no privativas de la libertad a las embarazadas y las mujeres que tengan hijos a cargo, y se estudiará imponer sentencias privativas de la libertad si el delito es grave o violento o si la mujer representa un peligro permanente, pero teniendo presentes los intereses superiores de los hijos y velando por que se adopten disposiciones apropiadas para el cuidado de esos hijos.



Protesta #FreeOurMamas frente a la prisión de Riverside en Filadelfia, EE.UU., el 15 de mayo de 2020

Crédito: Joe Piette | Flickr joepiette2 | CC BY-NC-SA 2.0

La mayoría de las mujeres en prisión son madres. Según una encuesta realizada en ocho países de América Latina por encargo del Banco Interamericano de Desarrollo, el 87% de las mujeres en prisión tenían hijos, en contraposición al 78% de los hombres¹¹¹. La tasa de mujeres encarceladas con niños era del 90% en Chile (2015)¹¹², 90% en Colombia (2017) y 70% en Panamá¹¹³. Esta realidad también se extiende a las mujeres detenidas por delitos relacionados con drogas. En Colombia, más del 90% de las mujeres encarceladas por un delito de drogas entre los años 2010 y 2014 eran madres¹¹⁴. Lo mismo aplica a Tailandia, donde en 2014 más del 80% de las mujeres en prisión estaban encarceladas por delitos de drogas, y más del 80% de ellas eran madres¹¹⁵. En España, en 2013 aproximadamente el 70% de las

mujeres en prisión tenían niños, con un promedio de 2.7 hijos por mujer, duplicando el promedio nacional de 1.3 niños por mujer¹¹⁶.

Una proporción significativa de mujeres encarceladas son madres solteras, y al momento de la detención ellas son las principales cuidadoras de sus hijos. Por ejemplo, en Costa Rica, un informe publicado en 2012 mostraba que el 93% de las mujeres detenidas por introducir drogas de contrabando en la prisión eran madres solteras – una realidad que llevó a reformar las leyes de drogas con una perspectiva de género¹¹⁷. Según una investigación reciente, entre 1.5 y 2 millones de niños en América Latina tienen un progenitor en prisión¹¹⁸.

Cuando la persona principal a cargo de la crianza está encarcelada, se perturban todos los aspectos de la vida de un menor, desde su relación con miembros de la familia y amigos, hasta el lugar donde viven¹¹⁹. Ello puede incluir separación traumática, pérdida de ingresos y dificultades en la escuela, entre muchos otros aspectos¹²⁰. La detención de la madre es particularmente dañina. En 2010, la psicóloga brasileña Claudia Stella concluyó que cuando un padre está en prisión, la mayoría de niños siguen siendo criados por sus madres, pero cuando la madre es encarcelada sólo el 10% permanece bajo el cuidado de sus padres¹²¹. En el Reino Unido, se estimaba que el 66% de las mujeres en la prisión eran madres de hijos menores de 18 años de edad, pero sólo el 5% de niños permanecían en sus propias casas cuando su madre era sentenciada a prisión¹²².

Otros aspectos dañinos de detener a una madre incluyen la separación permanente de niños de madres enviadas a prisiones muy alejadas de su domicilio habitual, y el hecho de que aproximadamente 19,000 menores en todo el mundo viven en las prisiones con sus madres¹²³, en entornos que claramente no son adecuados para satisfacer sus necesidades específicas.

Las mujeres embarazadas también enfrentan una serie de daños específicos mientras están encarceladas, como la falta de acceso a servicios clave de atención de salud, incluyendo atención e información prenatal; servicios referidos a drogas adaptados a sus necesidades; períodos de descanso adicional durante el día; y acceso limitado o nulo a agua potable, alimentos nutritivos o medicinas necesarias para mujeres embarazadas o lactantes (por ejemplo, suplementos de hierro, calcio, ácido fólico, vitaminas prenatales, frutas y verduras extra)¹²⁴. En algunos países, las mujeres embarazadas pueden enfrentar graves abusos a los derechos humanos, incluyendo ser esposadas a una cama durante controles prenatales e incluso durante el alumbramiento, lo cual ha sido documentado en países como los EE.UU.¹²⁵

En respuesta a esta realidad, las Reglas de Bangkok contienen a lo largo del documento una serie de disposiciones, así como una sección aparte sobre mujeres embarazadas, lactantes y quienes tienen niños en prisión (Reglas 48 a 52). Éstas son algunas de las más relevantes:

- El compromiso de asignar a mujeres privadas de su libertad a lugares de detención cercanos a sus domicilios, tomando en cuenta sus responsabilidades de crianza, y sus preferencias (Regla 4).
- El compromiso a brindar tratamiento de drogas especializado para mujeres embarazadas y mujeres con niños (Regla 15).
- La prohibición del confinamiento solitario o del impedimento de contacto con la familia para mujeres embarazadas, mujeres con hijos infantes, y madres lactantes (Regla 22).

- El compromiso de preferir alternativas a la prisión para mujeres embarazadas, o para mujeres con niños bajo su cuidado, y considerando “imponer sentencias privativas de la libertad si el delito es grave o violento o si la mujer representa un peligro permanente” (Regla 64).

La Regla de Bangkok 64 también es respaldada por instituciones e instrumentos regionales y globales de derechos humanos, desde el Consejo de Derechos Humanos hasta la Declaración Africana sobre los Derechos y el Bienestar de los Niños¹²⁶. Ello debe leerse a la luz del Artículo 3 de la Convención sobre el Derecho de los Niños, el cual estipula que se considere en todo momento los mejores intereses de los niños¹²⁷.

“Las cárceles no están diseñadas para las mujeres embarazadas y para las mujeres con niños pequeños. Debe hacerse todo esfuerzo que sea necesario para mantener a esas mujeres fuera de la cárcel, cuando sea posible y apropiado, teniendo en cuenta la gravedad del delito cometido y el riesgo para la sociedad”.

ONUDD. Comentario a las Reglas de Bangkok

La consideración automática de cualquier infracción relacionada con drogas como un delito grave que supone una amenaza general a la sociedad implica que las mujeres embarazadas, y aquellas con niños pequeños bajo su cuidado, son frecuentemente encarceladas sin importar la gravedad de su participación en el delito, ni sus circunstancias personales. En países como el Perú, toda persona declarada culpable por delitos relacionados con drogas –incluyendo a madres– están también excluidas de los beneficios carcelarios, incluyendo alternativas a la prisión¹²⁸. Más aún: un estudio reciente sobre arresto domiciliario en América Latina mostró que en países como el Perú, México o Ecuador, las alternativas a la prisión como el arresto domiciliario sólo son disponibles para madres antes de la sentencia, pero no después de ésta¹²⁹. En Camboya, donde la mayoría de las mujeres se encuentran encarceladas por delitos relacionados con drogas, los niños pueden acompañar a sus madres en prisión hasta los 3 años de edad; en febrero de 2019, las prisiones en Camboya albergaban a 170 madres con sus hijos, y a 51 mujeres embarazadas¹³⁰.

Existe una escasez generalizada de información disponible respecto a la situación de mujeres embarazadas, lactantes y en situación de postparto¹³¹. Ello es especialmente preocupante considerando la situación generalizada de hacinamiento, condiciones insalubres y de abuso en las prisiones a lo largo de América Latina y el Sudeste Asiático, lo cual sugiere que en muchos casos sus necesidades no son atendidas adecuadamente.

3.5 Leyes de drogas que socavan el compromiso de apoyar a las mujeres tras su liberación

Regla de Bangkok 45

Las autoridades penitenciarias brindarán en la mayor medida posible a las reclusas opciones como la visita al hogar, prisiones abiertas, albergues de transición y programas y servicios de base comunitaria, a fin de facilitar a su paso de la cárcel a la libertad, reducir la estigmatización y restablecer lo antes posible su contacto con sus familiares.

Regla de Bangkok 46

Las autoridades penitenciarias, en cooperación con los servicios de libertad condicional y de asistencia social, los grupos comunitarios locales y las organizaciones no gubernamentales, elaborarán y ejecutarán programas de reinserción amplios para el período anterior y posterior a la puesta en libertad, en los que se tengan en cuenta las necesidades específicas de las mujeres.

Regla de Bangkok 55

Se examinarán los servicios de atención anteriores y posteriores a la puesta en libertad, a fin de garantizar que resulten apropiados y accesibles para las reclusas indígenas y las pertenecientes a determinados grupos étnicos y raciales, en consulta con los grupos correspondientes.

Regla de Bangkok 63

Al adoptarse decisiones relativas a la puesta en libertad condicional anticipada se tendrán en cuenta favorablemente las responsabilidades maternas de las reclusas y sus necesidades específicas de reinserción social.



Reunión de Metzineres, Entornos de cobijo para mujeres que usan drogas sobreviviendo violencias

Crédito: Fotomovimiento | Flickr acampadabcnfoto | CC BY-NC-ND 2.0 Credit: Joe Pie

Las mujeres enfrentan considerables obstáculos para reconstruir sus vidas al salir de la prisión. La vasta mayoría de mujeres privadas de su libertad ya estaban viviendo en situaciones de vulnerabilidad al ingresar al sistema de justicia penal. Al ser liberadas, estas situaciones únicamente se exacerban¹³². Las mujeres que son declaradas culpables de delitos relacionados con drogas o que tienen antecedentes de consumo de

drogas a menudo enfrentan retos adicionales, debido a la exclusión de carácter formal o informal de los servicios sociales, así como al estigma social derivado de haber roto los roles tradicionalmente asignados a las mujeres¹³³.

La Regla de Bangkok 45 reconoce la importancia de brindar a las mujeres el espacio para reconectarse con sus familias y comunidades antes de ser puestas en

libertad¹³⁴. La excarcelación gradual a través de permisos para visitar a su familia, prisiones abiertas, y programas de base comunitaria (Regla 45), así como a través de la “libertad condicional anticipada” (Regla 63), también resulta útil para asegurar el bienestar básico y la estabilidad en la vida – en situaciones como encontrar alojamiento y empleo.

Las Reglas de Bangkok 46, 55 y 63 resaltan la obligación de las autoridades de proporcionar activamente servicios “integrales” y “sensibles al género” para el período post-liberación, que tomen en cuenta las necesidades específicas de las mujeres. Tales servicios comprenden desde el apoyo más básico y urgente, como proporcionar a las mujeres documentos oficiales de identificación (una necesidad especialmente apremiante para mujeres con un estatus migratorio incierto¹³⁵ y para algunas mujeres trans¹³⁶), hasta servicios más complejos y de largo aliento, como apoyar el acceso a vivienda, educación y empleo.

Accediendo a beneficios de programas sociales

Las leyes y políticas que bloquean el acceso de personas condenadas por delitos de drogas, o que usan drogas, a beneficios de programas sociales, incluyendo el acceso crítico a vivienda, empleo o educación, socavan los compromisos establecidos en las Reglas de Bangkok.

La falta de vivienda segura y estable puede tener un impacto devastador en la vida de una persona; es un factor clave para predecir el desempleo, riesgos de salud como una mayor prevalencia del VIH; y de conductas de riesgo como compartir equipos para la inyección de drogas¹³⁷. Ello no obstante, la Oficina de Vivienda Social de los EE.UU. excluía a personas involucradas en actividades referidas a drogas, incluyendo a personas con antecedentes de uso de drogas, del acceso a vivienda social, a través tanto del rechazo a sus solicitudes como del desalojo posterior¹³⁸. En 2018, en Nueva Gales del Sur, Australia, se impuso una prohibición hacia personas condenadas por delitos de “tráfico o elaboración de drogas” respecto al acceso a viviendas sociales¹³⁹. Más allá de estos ejemplos de carácter formal, la exclusión informal perpetrada por propietarios privados y autoridades públicas probablemente existe en muchos países.

Considerando beneficios aparte de la vivienda, algunos países también restringen el acceso al apoyo estatal para personas que han sido condenadas por delitos relacionados con drogas, o personas que usan drogas. En varios estados de los EE.UU., las personas que son encontradas culpables por delitos de drogas tienen acceso limitado a beneficios sociales, incluyendo asistencia financiera para familias y cupones para adquirir

Recuadro 4 Programas para la reintegración social con una perspectiva de género

Sólo unos cuantos países han establecido mecanismos para facilitar la reintegración social de mujeres que han estado encarceladas. Costa Rica es una notable excepción. En 2014, este país estableció una red interinstitucional orientada a apoyar a las mujeres que habían estado encarceladas, o que se habían beneficiado de una alternativa al encarcelamiento, con un amplio espectro de servicios sociales y de salud, incluyendo la búsqueda de empleo y apoyo para la crianza de hijos¹⁴⁰. Aunque esta red se encuentra ahora menos activa que lo que había estado inicialmente, se trata de un ejemplo interesante de cómo las mujeres pueden ser empoderadas y respaldadas para obtener independencia económica y tomar decisiones que afectan sus vidas.

En la mayoría de los países, la ausencia de programas operados por el gobierno a nivel de la comunidad ha alentado a las ONG y grupos afectados a llenar este vacío. En Kenia, el programa *Clean Start* (Nuevo Comienzo) ayuda a mujeres que han estado encarceladas a volver a levantar cabeza al ofrecerles conocimientos prácticos, educación y capacitación vocacional, oportunidades de empleo, y apoyo de pares¹⁴¹. En Argentina, la ONG ACIFaD apoya a los familiares de personas encarceladas, facilitando grupos y redes de apoyo¹⁴².

alimentos¹⁴³; esta medida tiene un impacto especial sobre las mujeres, quienes son las beneficiarias más comunes de estos programas de apoyo financiero. También se han utilizado pruebas para detectar el uso de drogas en los beneficiarios de servicios sociales en Nueva Zelanda, y esta medida ha sido propuesta asimismo en Australia¹⁴⁴. Aunque éstos son ejemplos de carácter formal, es probable que la exclusión informal sea mucho más amplia. En cualquier caso, estas políticas discriminatorias no son compatibles con el compromiso de brindar apoyo integral a mujeres que han sido condenadas por delitos de drogas.

Superando las barreras creadas por los antecedentes penales

Finalmente, los antecedentes penales actúan como una barrera para encontrar empleo, dado que las mujeres liberadas de prisión se encuentran atrapadas en un ciclo de exclusión social y marginalización que las hace más vulnerables a participar en actividades

ilegales que antes del encarcelamiento¹⁴⁵. Diversas iniciativas positivas –que siguen siendo la excepción antes que la norma– se han concentrado en reducir barreras al empleo creadas por los antecedentes penales. En Costa Rica, por ejemplo, la Ley 9361, promulgada en enero de 2017, reformó el registro judicial para permitir que los antecedentes penales sean eliminados o reducidos para infractores no violentos en situación de vulnerabilidad – descripción que

corresponde a la mayoría de mujeres encarceladas por delitos relacionados con drogas¹⁴⁶. Otro ejemplo de carácter más local es la estrategia “*Ban the box*” (Proscribe el recuadro) o “*Fair chance*” (Oportunidad justa) en los EE.UU., donde más de 100 jurisdicciones han cambiado sus leyes para limitar preguntas sobre antecedentes penales como parte de procesos de solicitud de empleo¹⁴⁷.

3.6 Leyes de drogas que socavan los derechos de las mujeres extranjeras privadas de su libertad



Dentro de la sección de mujeres de una prisión en la provincia de Chaingrai, Tailandia
Crédito: Consorcio Internacional de Políticas de Drogas

Regla de Bangkok 53.1

Cuando existan acuerdos bilaterales o multilaterales pertinentes, se estudiará la posibilidad de trasladar lo antes posible a las reclusas extranjeras no residentes a su país de origen, en particular si tienen hijos en él, y en caso de que las interesadas lo soliciten o consientan informadamente en ello.

Muchas mujeres condenadas por delitos de drogas son encarceladas lejos de sus países de origen. Se trata de un fenómeno global. Por ejemplo, en Malasia el 85% de todas las mujeres condenadas a muerte eran extranjeras, y el 90% de ellas habían sido condenadas por un delito relacionado con drogas¹⁴⁸. En el Reino Unido y Portugal, el 80% de las mujeres extranjeras en prisión han sido declaradas culpables de un delito relacionado con drogas – el doble que los presos varones extranjeros^{149,150}. En España, un estudio publicado en 2016 identificó que el 72% de todas las mujeres encarceladas provenían de países de América Latina¹⁵¹; la mayoría de las mujeres extranjeras habían sido condenadas por transportar drogas y habían seguido siendo la principal fuente de ingresos para sus familias, incluso desde la prisión. Un estudio realizado en 2011 en Argentina mostraba que el 90% de mujeres extranjeras encarceladas por un delito de drogas habían tratado de cruzar fronteras internacionales camuflando estas sustancias en sus equipajes, ropa o cuerpos¹⁵².

Las mujeres extranjeras encarceladas por delitos de drogas pueden ser, o bien residentes en el país en que han sido detenidas, o bien estar de visita por un breve período cuando fueron arrestadas. En ambos casos, ellas enfrentan una serie de retos específicos, incluyendo un estatus migratorio incierto; falta de conocimiento o entendimiento de las leyes, la justicia penal o el idioma del país en el cual están detenidas; limitados recursos financieros para obtener asesoría legal adecuada o para pagar la fianza; y falta de vivienda o empleo estables, lo cual las descalifica para el otorgamiento de alternativas a la prisión¹⁵³. Incluso si resultan ser elegibles para obtener la fianza, las personas extranjeras tienen más probabilidades de recibir la orden de prisión preventiva, especialmente si corresponden a minorías étnicas o raciales oprimidas¹⁵⁴. Según datos publicados en 2019, en Chile, Colombia y el Perú, el 73.3%, 50.9% y 42.9% (respectivamente) de las mujeres extranjeras en prisión se encuentran en situación de prisión preventiva¹⁵⁵.

En algunos casos, las mujeres extranjeras permanecen detenidas lejos de sus familias y redes de apoyo, lo cual significa que no reciben ayuda externa durante el período de encarcelamiento. Ello es particularmente difícil en países donde las personas privadas de su libertad dependen de sus familiares para recibir alimentos, ropa y otros bienes esenciales. Más aún: sin asesoría legal de calidad es improbable que las mujeres que han ingresado a los mercados ilegales de drogas en el extranjero debido al tráfico de personas, puedan demostrar que ésta es su situación. Los servicios de apoyo también deben adaptarse a las necesidades de las mujeres extranjeras para poder abordar barreras del idioma, la exclusión de muchos programas de formación laboral y rehabilitación dentro de las prisiones¹⁵⁶, y la falta de visitas familiares.

Cuando una persona extranjera es detenida, la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares estipula que las autoridades locales informen a los servicios consulares del país de origen respectivo para que éste pueda brindarle servicios de apoyo, asesoría legal e interpretación en el proceso. La Reglas de Bangkok 2.1 establecen una obligación similar. Sin embargo, con frecuencia tal apoyo no es ofrecido de manera oportuna¹⁵⁷.

En el Comentario a las Reglas de Bangkok, la ONUDD señala que la Regla 53 resulta particularmente importante debido al “desproporcionado número de mujeres involucradas en el tráfico internacional de estupefacientes¹⁵⁸” y especialmente para aquellas con familias e hijos en su país de origen¹⁵⁹. Para los hijos de mujeres extranjeras en prisión, el encarcelamiento representa un grado más de perturbación, tanto cuando residen en su país de origen, lejos del lugar donde está detenida su madre y con escaso o ningún contacto con ella, como cuando viven en el país anfitrión donde el encarcelamiento de su madre tendrá un amplio rango de impactos negativos adicionales, incluyendo su estatus migratorio, acceso a educación o salud¹⁶⁰.

La Regla de Bangkok 53 reconoce esta vulnerabilidad y alienta a los países a considerar “trasladar lo antes posible a las reclusas extranjeras no residentes a su país de origen, en particular si tienen hijos en él, y cuando ellas lo soliciten o consientan en ello de manera informada”. Para quienes así lo eligen, se espera

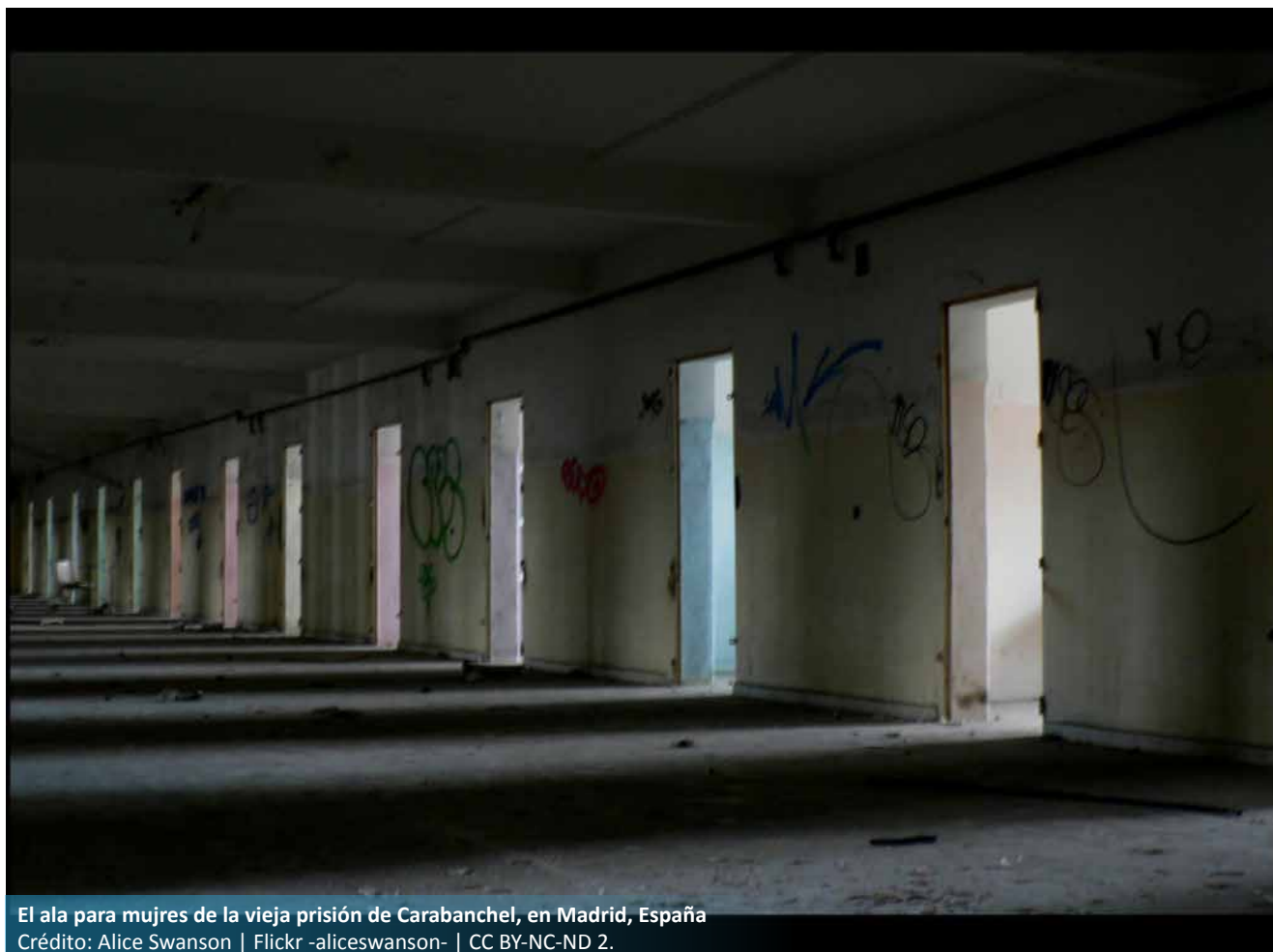
que la repatriación voluntaria sea beneficiosa de dos maneras. En primer lugar, el plazo y las condiciones de su sentencia de prisión podrían ser más convenientes para ellas en su país de origen; en segundo lugar, podrían estar más cerca de su red de apoyo, y tener una mejor comprensión sobre sus derechos y su situación¹⁶¹.

Distinguir entre repatriación y deportación

El Comentario de la ONUDD hace una nítida distinción entre repatriación y deportación. Mientras la repatriación busca reducir el impacto dañino del encarcelamiento, la deportación es una medida punitiva que complementa una sentencia de prisión¹⁶². Debido a ello, la Regla de Bangkok 53 aclara que la repatriación debe ser voluntaria, y sólo debe ocurrir una vez que la persona privada de su libertad recibe información clara y completa sobre su derecho a solicitar un traslado a su país de origen, y las consecuencias legales de esta decisión.

Ello no obstante, varios países usan la deportación como un castigo contra personas extranjeras que son condenadas por delitos de drogas, incluso cuando se trata de residentes con documentación en orden. En los EE.UU., el número de personas deportadas por un delito relacionado con drogas se incrementó en un 22% del año 2007 al 2012, hasta llegar a un total de 260,000 personas – incluyendo tanto a residentes permanentes como a personas con estatus migratorio irregular; durante el mismo período, el número de personas deportadas por posesión de drogas aumentó en un 43%¹⁶³. Una encuesta a 41 mujeres extranjeras encarceladas en Portugal –al menos 30 de las cuales habían sido encontradas culpables de un delito de drogas, y varias de ellas eran residentes permanentes– encontró que la mayoría de ellas serían deportadas obligatoriamente después de cumplir su sentencia en prisión¹⁶⁴. La deportación es especialmente perjudicial para mujeres que tienen niños, familias y redes de apoyo en el país anfitrión. En un documento de investigación publicado en 2020, las mujeres que enfrentaban un escenario de deportación desde España tras cumplir una sentencia de prisión expresaban su temor de ser apartadas de sus familias e hijos¹⁶⁵.

4. Recomendaciones: Alineando las leyes de drogas con las Reglas de Bangkok



El ala para mujeres de la vieja prisión de Carabanchel, en Madrid, España

Crédito: Alice Swanson | Flickr -aliceswanson- | CC BY-NC-ND 2.

Diez años después de su adopción, los Estados no cumplirán los compromisos establecidos en las Reglas de Bangkok si no reforman las leyes punitivas sobre drogas. Valiéndose de los análisis realizados para elaborar este informe, esta sección presenta recomendaciones urgentes y de largo aliento para que los gestores de políticas informen la próxima década de la implementación de las Reglas de Bangkok.

4.1. Recomendaciones urgentes

Nuestras recomendaciones prioritarias se enfocan en la urgente necesidad de descongestionar las prisiones y reducir el número de mujeres que ingresan al sistema de justicia penal. Las prisiones en todo el mundo, afectadas por el hacinamiento y la falta de recursos, son simplemente incapaces de proteger la salud y derechos de las mujeres privadas de su libertad. Ello es especialmente cierto durante la crisis del COVID-19, pero el prolema del hacinamiento de las prisiones precede y muy probablemente subsistirá a la pandemia global. Más aún: las prisiones no son un entorno apropiado o justo para abordar las causas que subyacen a la participación de las mujeres en actividades ilegales referidas a drogas. Por consiguiente,

las Reglas de Bangkok deben ser interpretadas dentro de un conjunto más amplio de esfuerzos para reducir las poblaciones carcelarias en todo el mundo. Deben priorizarse medidas orientadas a contener el número de mujeres en las prisiones.

Implementar las Reglas de Bangkok 57 y 58 sobre medidas no privativas de la libertad:

- Abordar el hacinamiento de las prisiones mediante la liberación inmediata de todas las mujeres encarceladas por delitos menores o no violentos relacionados con drogas, incluyendo entre otros el consumo y posesión de drogas para uso personal, y delitos referidos al suministro de drogas sin hacer uso de la violencia, cometidos por mujeres en situación de vulnerabilidad, así como asegurar un apoyo adecuado para su integración en la comunidad.
- En el contexto de COVID-19, es especialmente urgente liberar a las mujeres que presentan riesgos de salud, así como a mujeres en situación de vulnerabilidad, tales como mujeres mayores, discapacitadas, embarazadas, mujeres con niños, y aquellas que son responsables por otros dependientes¹⁶⁶.

- Corregir urgentemente leyes y políticas para asegurar que las mujeres acusadas, imputadas o halladas culpables por delitos menores o no violentos relacionados con drogas sean elegibles para medidas de derivación y alternativas a la prisión y castigo.

Implementar la Regla de Bangkok 15 sobre servicios de drogas en prisiones:

- Garantizar que las mujeres que permanecen en prisión durante la pandemia tengan acceso a servicios de drogas que sean estrictamente voluntarios, basados en evidencias y en derechos, y sensibles al género, incluyendo tratamiento de la dependencia a las drogas, reducción de daños y servicios de apoyo adicional enfocados en abordar antecedentes de trauma, violencia de género y temas de salud mental.

4.2. Recomendaciones de largo plazo para los gestores de políticas

Estas recomendaciones se orientan a abordar los temas sistemáticos que han impulsado el encarcelamiento excesivo de mujeres durante las últimas décadas.

Implementar las Reglas de Bangkok 57, 58 y 60 sobre medidas no privativas de la libertad:

- Revisar las leyes y políticas para garantizar que la prisión sea empleada únicamente como medida de último recurso. Ello incluye descriminalizar el uso de drogas y la posesión de estas sustancias para uso personal. Donde se mantengan penalidades para delitos de drogas, garantizar una determinación más proporcional de las sentencias¹⁶⁷.
- Eliminar el uso obligatorio o desproporcionado de la prisión preventiva para delitos de drogas, y derogar leyes y políticas que excluyen a personas condenadas por delitos relacionados con drogas respecto a alternativas a la prisión o al castigo.
- Mejorar el acceso a la representación legal de calidad a fin de incrementar el acceso a las alternativas a la prisión y al castigo ya existentes.
- Garantizar que los factores subyacentes que llevan a las mujeres en contacto con la economía ilegal de las drogas, como la pobreza, marginalización, coerción, violencia conyugal o responsabilidades de crianza, sean considerados en la implementación de medidas no privativas de la libertad, durante y después de la determinación de sentencias.
- Complementar medidas no privativas de la libertad con programas de apoyo sensibles al género que aborden estos factores específicos. Priorizar y financiar programas que sean liderados por integrantes de las comunidades afectadas.

Implementar la Regla Bangkok 61 sobre circunstancias atenuantes:

- Reformar leyes y políticas referidas a drogas para eliminar las penas mínimas de prisión obligatorias para delitos relacionados con drogas.
- Reformar leyes y políticas referidas a drogas para permitir la consideración de circunstancias atenuantes en la determinación de sentencias para delitos de drogas, tomando en cuenta el papel que cumple la persona en el tráfico ilegal, así como las razones detrás de su participación.
- Establecer circunstancias atenuantes sensibles al género para abordar las principales razones por las cuales las mujeres se ven involucradas en las economías ilegales de drogas, tales como antecedentes de violencia doméstica, antecedentes de trauma, coerción, responsabilidades de crianza, y otros.

Implementar las Reglas de Bangkok 15, 41(b) y 62 sobre servicios de drogas en prisiones:

- Garantizar acceso a servicios esenciales de reducción de daños en prisiones y espacios de detención para mujeres, incluyendo entre otros las terapias de agonistas opioides, y los programas de agujas y jeringas.
- Garantizar acceso a programas de tratamiento de la dependencia a las drogas que sean voluntarios, basados en evidencias, sensibles al género y habilitados para el tratamiento de trauma, así como el acceso a servicios de apoyo social para mujeres privadas de su libertad y que consumen drogas.
- Capacitar al personal penitenciario para relacionarse de manera positiva con los servicios existentes para reducción de años, a fin de evitar la estigmatización de mujeres que recurren a estos servicios¹⁶⁸.
- Garantizar que el tratamiento de la dependencia a drogas y otros servicios referidos a estas sustancias, brindados en el contexto de medidas de alternativa a la prisión, sean estrictamente voluntarios y no condicionados. El rechazo o abandono del tratamiento no debe implicar castigo ni encarcelamiento.

Implementar las Reglas de Bangkok 4, 15 y 64 sobre mujeres embarazadas, lactantes y con niños¹⁶⁹:

- Corregir leyes y políticas referidas a drogas para garantizar que las mujeres embarazadas, lactantes y con niños que sean detenidas, acusadas o encontradas culpables de un delito de drogas, tengan acceso preferencial a medidas no privativas de la libertad. La prisión debe ser una medida de último recurso.

- Cuando circunstancias extraordinarias no permiten emplear medidas no privativas de la libertad, se debe mantener a mujeres privadas de su libertad cerca de sus hijos y familias. Los Estados deben cubrir los costos en que incurren las mujeres encarceladas para hablar con sus familias, y para que las familias las visiten en prisión.
- Eliminar sanciones penales y otras medidas disciplinarias (por ejemplo, el retiro de la custodia del recién nacido, o el tratamiento bajo coerción) contra las mujeres embarazadas que usan drogas. El acceso a tratamiento de drogas y servicios para reducción de daños, adaptados a las circunstancias específicas de mujeres embarazadas, debe ofrecerse únicamente en un régimen voluntario.
- Reconocer a los hijos de mujeres encarceladas como titulares de derechos, y garantizar que todas las decisiones sobre su alojamiento en las prisiones sean tomadas con el criterio de defender su mejor interés. Cuando los niños terminan viviendo en la prisión, los Estados tienen una obligación aun mayor de garantizar sus derechos al desarrollo personal, al bienestar, a la salud y educación, y a poder mantener contacto con el mundo exterior.
- Eliminar leyes y políticas que implican la deportación automática de mujeres declaradas culpables de delitos relacionados con drogas. Para mujeres embarazadas y aquellas con hijos bajo su cuidado, las decisiones de deportación deben tomar en cuenta el mejor interés de la persona menor.

Recomendaciones transversales:

- Garantizar que todas las mujeres que ingresan al sistema de justicia penal sean sistemáticamente informadas de sus derechos humanos según los plantean las Reglas de Bangkok.
- Adoptar un enfoque interseccional hacia la implementación y monitoreo de las Reglas de Bangkok, adaptando programas a las diferentes necesidades de las mujeres involucradas en el sistema de justicia penal.
- Recolectar información desagregada en función de género para dar seguimiento al número y perfil de mujeres que ingresan al sistema de justicia penal, número de mujeres encarceladas, condiciones generales de las prisiones, así como el número de mujeres que se han beneficiado de alternativas al castigo o a la prisión. Podrían recogerse datos adicionales sobre cuántas mujeres se están beneficiando de servicios de apoyo, incluyendo servicios referidos a drogas, que se ofrezcan en las prisiones y como alternativa al encarcelamiento.

Implementar las Reglas de Bangkok 45, 46, 55 y 63 sobre la transición hacia la comunidad:

- Facilitar la transición de las mujeres desde la prisión hacia la comunidad a través de medidas de excarcelación gradual que les permitan obtener una fuente ingresos, vivienda segura, y el restablecimiento de lazos con sus familias y comunidades.
- Derogar las leyes y políticas que impiden que las personas declaradas culpables de delitos relacionados con drogas, y personas que usan drogas, accedan a la vivienda pública, y a otros beneficios sociales.
- Establecer mecanismos públicos de apoyo para mujeres liberadas de las prisiones, desde vivienda y apoyo financiero hasta tratamiento de la dependencia a las drogas.
- Brindar financiamiento y apoyo a organizaciones lideradas por la comunidad que acompañan a mujeres actual y anteriormente encarceladas en su transición de la prisión hacia la comunidad.

Implementar la Regla de Bangkok 63 sobre personas extranjeras:

- Establecer mecanismos, incluyendo acuerdos bilaterales o multilaterales con otros países, para facilitar el traslado voluntario de mujeres extranjeras privadas de su libertad hacia sus países de origen.

Reconocimientos

Quienes redactamos este informe quisiéramos agradecer a Albert Wyrja (LBH Masyarakat), Coletta Youngers (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), a Gerardo Contreras y a Karen Silva (EQUIS Justicia para las Mujeres), así como a Triona Lenihan y Olivia Rope (*Penal Reform International*), por su ayuda en la revisión y elaboración del documento. También nos gustaría agradecer a Claudia Cardona de la Corporación Humanas Colombia por el tiempo que dedicó a compartir sus experiencias difundiendo las Reglas de Bangkok. Muchas gracias como siempre a Kique Bossio por la excelente traducción, y a *Penal Reform International*, la Oficina de Washington para Asuntos Latinoamericanos, y a Dejusticia por su contribución a la versión en español de este informe.

Notas

1. Adrià Cots Fernández y Marie Nougier son, respectivamente, Encargado de Investigación e Incidencia, y Jefa de Investigaciones y Comunicaciones, en el Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas.
2. Asamblea General de la ONU (2010), *Reglas de las Naciones Unidas para el tratamiento de las reclusas y medidas no privativas de la libertad para las mujeres delincuentes* (Reglas de Bangkok), UN Doc. A/C.3/65/L.5, https://www ONUDD.org/documents/justice-and-prison-reform/crimeprevention/65_229_Spanish.pdf
3. Barzanò, P. (2012), "The Bangkok Rules: An international response to the needs of women offenders", *Resource Material Series* 90: 81, https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No90/No90_11VE_Barzano.pdf
4. *Penal Reform International* (2013), *UN Bangkok Rules on women offenders and prisoners: Short guide*, <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/07/PRI-Short-Guide-Bangkok-Rules-2013-Web-Final.pdf>
5. *Ibid.*
6. Barzanò, P. (2012), "The Bangkok Rules: An international response to the needs of women offenders", *Resource Material Series* 90: 86, https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No90/No90_11VE_Barzano.pdf
7. Para conocer una visión general, consultar: Barberet, R. y Jackson, C. (2017), "UN rules for the treatment of women prisoners and non-custodial sanctions for women offenders (The Bangkok Rules): A gendered critique", *Papers: Revista de Sociología* 102(2), <https://ddd.uab.cat/record/171318>
8. García Castro, T. y Santos, M. (2020), *Trans women deprived of liberty: Invisible stories behind bars* (Almas Cautivas, Casa de las Mujeres Tiresias, Casa Hogar Paola Buenrostro, Corpora en Libertad, Dejusticia, EQUIS Justicia para las Mujeres, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), <https://idpc.net/publications/2020/04/trans-women-deprived-of-liberty-invisible-stories-behind-bars>
9. Centro de Estudios Legales y Sociales, Dejusticia, Elementa Derechos Humanos, EQUIS Justicia para las Mujeres, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Plataforma NNAPES y Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (2020), *Comentarios a solicitud de opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en materia de personas privadas de la libertad*, <http://fileserv.idpc.net/library/Observaciones-OC-Enfoques-diferenciados-en-materia-de-PPL-27112020.pdf>
10. Sawangying, T., Stoicescu, C. y Wattanawanitchako, P. (21 de octubre de 2020), "'Drugs were as normal as eating rice': Understanding the experiences and needs of transgender sex workers in Pattaya, Thailand", Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, <https://idpc.net/blog/2020/10/drugs-were-as-normal-as-eating-rice-understanding-the-experiences-and-needs-of-transgender-sex-workers-in-pattaya-thailand>
11. Asociación de Derechos Humanos Cozumel Trans *et al.* (2020), *Promoting the rights of trans women deprived of liberty in Latin America*, <https://idpc.net/alerts/2020/12/promoting-the-rights-of-trans-women-deprived-of-liberty-in-latin-america>
12. Lenihan, T. (10 de diciembre de 2020), "Addressing the 105,000 increase in the global female prison population, ten years after the Bangkok Rules were adopted", *Penal Reform International*, <https://www.penalreform.org/blog/addressing-the-105000-increase-in-the-global-female>
13. Walmsley, R. (2017), *World Female Imprisonment List* (Londres: World Prison Brief), p.2, https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_female_prison_4th_edn_v4_web.pdf
14. Lenihan, T. (10 de diciembre de 2020), "Addressing the 105,000 increase in the global female prison population, ten years after the Bangkok Rules were adopted", *Penal Reform International*, <https://www.penalreform.org/blog/addressing-the-105000-increase-in-the-global-female/>
15. *Ibid.*
16. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Dejusticia, Comisión Interamericana de Mujeres y Organización de Estados Americanos (2016), *Women, Incarceration, and drug policies: A Guide for Policy Reform in Latin America and the Caribbean*, p. 8, <http://fileserv.idpc.net/library/WOLA-WOMEN-FINAL-ver-25-02-1016.pdf>
17. Transnational Institute y Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (2011), *Systems overload: Drug laws and prisons in Latin America*, p. 5, <http://www.drogasyderecho.org/wp-content/uploads/2015/05/so-completo.pdf>
18. *Ibid.*, p. 22.
19. *Ibid.*, p. 50.
20. *Ibid.*, p. 72.
21. Stoicescu, C y Palmer, W., (15 de octubre de 2019), "Drugs and drug policy", *Inside Indonesia*, <https://www.insideindonesia.org/drugs-and-drug-policy#:~:text=Indonesia%20ratified%20the%20UN%20conventions,in%201961%2C%201971%20and%201988.&text=For%20the%20last%20two%20decades,and%20further%20amended%20in%202009>
22. Bridge, J. y Loglo, M. (noviembre de 2017), *Drug laws in West Africa: A review and summary* (Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas y Comisión sobre Drogas del África Occidental), pp. 2-4, http://fileserv.idpc.net/library/Drug-laws-in-West-Africa_ENGLISH.pdf
23. Walmsley, R. (2017), *World Female Imprisonment List* (Londres: World Prison Brief), https://www.prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/world_female_prison_4th_edn_v4_web.pdf
24. Centro de Estudios Legales y Sociales, Dejusticia, EQUIS Justicia para las Mujeres, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas y Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (2018), *Women deprived of liberty: Submission to the Working Group on the issue of discrimination against women in law and practice*, p. 3, http://fileserv.idpc.net/library/OHCHR-WG-discriminations-against-women_Contribution_Sept-2018.pdf
25. Alvarez, M. (2018), *Women incarceration and drug policies in the Philippines: Promoting humane and effective responses*, (Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas y NoBox Philippines), p. 13, http://fileserv.idpc.net/library/Philippines_Policy_Guide_Women.pdf
26. ONUDD (2018), *Women and drugs: Drug use, drug supply and their consequences*, p. 9, https://www ONUDD.org/wdr2018/prelaunch/WDR18_Booklet_5_WOMEN.pdf
27. Youngers, C., García Castro, T. y Manzur, M. (2020), *Women behind bars for drug offenses in Latin America*, (Washington: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), p. 9, <https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/Final-Women-Behind-Bars-Report.pdf>
28. Asamblea General de las Naciones Unidas (1990), *United Nations standard minimum rules for non-custodial measures (The Tokyo Rules)*, Resolución 45/110, <https://www.ohchr.org/documents/professionalinterest/tokyorules.pdf>
29. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) (2010), *The Bangkok Rules – United Nations Rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders with their commentary*, p. 43, https://www ONUDD.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
30. Uprimmy, R. *et al* (2016), *Women, drug policies, and incarceration: A Guide for Policy Reform in Colombia* (Bogotá:

- Dejusticia), p. 23, https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2017/04/fi_name_recurso_866.pdf?x54537
31. Barzanò, P. (2012), "The Bangkok Rules: An international response to the needs of women offenders", *Resource Material Series* 90: 83, https://www.unafei.or.jp/publications/pdf/RS_No90/No90_11VE_Barzano.pdf
 32. Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONU-DD) (2010), *The Bangkok Rules – United Nations Rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders with their commentary*, p. 43, https://www.ONUDD.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
 33. ONUDD (2020), *Toolkit on gender-responsive non-custodial measures*, p. 14, https://www.ONUDD.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01528_Gender_Toolkit_complete.pdf
 34. Inter-American Drug Abuse Control Commission (2015), *Technical report on alternatives to incarceration for drug-related offenses*, p. 15, http://www.cicad.oas.org/fortalecimiento_institucional/dtca/publications/ReportOnAlternativesToIncarceration_ENG.pdf
 35. Giacomello, C. (2020), *Chapter 12 - The gendered impacts of drug policy on women: Case studies from Mexico*, en: Buxton, J., Chinery-Hesse, M y Tinasti, K. (Eds.), *Drug Policies and Development: Conflict and Coexistence* (Leiden: Drug Policies and Development), <https://brill.com/view/book/edcoll/9789004440494/BP000016.xml>
 36. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Dejusticia, Comisión Interamericana de Mujeres y Organización de Estados Americanos (2016), *Women, Incarceration, and drug policies: A Guide for Policy Reform in Latin America and the Caribbean*, p. 3 <http://filesserver.idpc.net/library/WOLA-WOMEN-FINAL-ver-25-02-1016.pdf>
 37. Giacomello, C. (2020), *Chapter 12 - The gendered impacts of drug policy on women: Case studies from Mexico*, in: Buxton, J., Chinery-Hesse, M y Tinasti, K. (Eds.), *Drug Policies and Development: Conflict and Coexistence* (Leiden: Drug Policies and Development), <https://brill.com/view/book/edcoll/9789004440494/BP000016.xml>
 38. Chuenurah C. y Park, M.Y. (2016), "Women prisoners in Southeast Asia: Their Profiles and Pathways to Prison", *Korean Journal of Correctional Discourse* 10(3), pp. 75-79.
 39. Penal Reform International, Linklaters, IDPC (2020), *Sentencing of women convicted of drug-related offences*, p. 13, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/02/LinklatersPRI_Sentencing-of-women-convicted-of-drug-related-offences_WEB.pdf
 40. https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/02/LinklatersPRI_Sentencing-of-women-convicted-of-drug-related-offences_WEB.pdf *Ibid*, p. 13.
 41. *Ibid*.
 42. Penal Reform International (sitio web), *The issue*, <https://www.penalreform.org/issues/pre-trial-justice/issue/> (consultado: 4 de febrero de 2021).
 43. Los datos en este párrafo provienen de: Youngers, C., García Castro T. y Manzur, M. (2020), *Women behind bars for drug offenses in Latin America*, (Washington: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), <https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/Final-Women-Behind-Bars-Report.pdf>; Hutt, D. (26 July 2019), "The Bail Challenge in Southeast Asia", *The Diplomat*, <https://thediplomat.com/2019/07/the-bail-challenge-in-southeast-asia>
 44. Sawyer, W. y Wagner, P., (19 March 2019), *Mass incarceration: The whole pie 2019*, p. 4, <https://law.loyno.edu/sites/law.loyno.edu/files/images/Class%202%20US%20Mass%20Incarceration%20PPI%202019.pdf>
 45. Open Society Foundations y United Nations Development Program (2011), *The Socioeconomic Impact of Pretrial Detention: A Global Campaign for Pretrial Justice Report*, p. 12, <https://issat.dcaf.ch/mkd/download/11546/116456/socioeconomic-impact-pretrial-detention-02012011.pdf>
 46. García Castro, T. (2019), *Pretrial detention in Latin America: The disproportionate impact on women deprived of liberty for drug offenses* (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Dejusticia, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas), p. 5, http://filesserver.idpc.net/library/Pretrial-detention-in-Latin-America_June-2019.pdf
 47. Fair, H., Heard, C. (2019), *Pre-trial detention and its over-use: Evidence from ten countries*, (Birkbeck: Institute for Crime y Justice Policy Research), p. 15, https://prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/pre-trial_detention_final.pdf
 48. García Castro, T. (2019), *Pretrial detention in Latin America: The disproportionate impact on women deprived of liberty for drug offenses* (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Dejusticia, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas), p. 5, http://filesserver.idpc.net/library/Pretrial-detention-in-Latin-America_June-2019.pdf
 49. Dea, A., Permata, A., y Zakiyah, N. (2019), *Yang Terabaikan: Potret Situasi Perempuan yang Dipenjara Akibat Tindak Pidana Narkotika* (Jakarta: LBH Masyarakat, 2019), pp 44-48, https://lbhmasyarakat.org/wp-content/uploads/2019/09/Laporan-Penelitian-LBHM_Potrets-Situasi-Perempuan-Yang-Dipenjara-Akbat-Tindak-Pidana-Narkotika.pdf
 50. García Castro, T. (2019), *Pretrial detention in Latin America: The disproportionate impact on women deprived of liberty for drug offenses* (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Dejusticia, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas), p. 5, http://filesserver.idpc.net/library/Pretrial-detention-in-Latin-America_June-2019.pdf
 51. Orjiakor, C. et al. (2017), "Prolonged incarceration and prisoners' wellbeing: lived experiences of awaiting trial/pre-trial/remand prisoners in Nigeria", *International Journal of Qualitative Studies on Health and Well-being* 12(1), <https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/17482631.2017.1395677>
 52. Fair Trials (2018), *Time for bail: Ending needless mass detention in Cambodia*, <https://www.fairtrials.org/news/time-bail-ending-needless-mass-detention-cambodia>
 53. García Castro, T. (2019), *Pretrial detention in Latin America: The disproportionate impact on women deprived of liberty for drug offenses* (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Dejusticia, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas), p. 6, http://filesserver.idpc.net/library/Pretrial-detention-in-Latin-America_June-2019.pdf
 54. Cambodian League for the Promotion and Defense of Human Rights (2018), *Time for bail: Ending needless mass detention*, p. 3, https://www.licadho-cambodia.org/reports/files/227Time%20for%20Bail_Ending%20Needless%20Mass%20Detention_fin.pdf
 55. *Ibid*, p. 7.
 56. *Ibid*, p. 8.
 57. Fair, H., Heard, C. (2019), *Pre-trial detention and its over-use: Evidence from ten countries*, (Birkbeck: Institute for Crime y Justice Policy Research), p. 18, https://prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/pre-trial_detention_final.pdf
 58. Alvarez, M. (2018), *Women incarceration and drug policies in the Philippines: Promoting humane and effective responses*, (Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas y NoBox Philippines), p. 20, http://filesserver.idpc.net/library/Philippines_Policy_Guide_Women.pdf
 59. UN Office of the High Commissioner for Human Rights (2003), *Human Rights in the Administration of Justice: A Ma-*

- nual on Human Rights for Judges, Prosecutors, and Lawyers, p. 375, <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/training9chapter9en.pdf>
60. Penal Reform International (2020), *Global Prison Trends 2020*, p. 16, <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/05/Global-Prison-Trends-2020-Penal-Reform-International-Second-Edition.pdf>
 61. Ibid.
 62. Ibid.
 63. DeCourcy, E. (2020), "The injustice of formal gender equality in sentencing", *Fordham Urb. L. J.* **47**(395), p. 427, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3557265
 64. ONUDD (2020), *Toolkit on gender-responsive non-custodial measures*, p. 42, https://www.ODDD.org/documents/justice-and-prison-reform/20-01528_Gender_Toolkit_complete.pdf
 65. Drug Policy Advocacy Group Myanmar (2017), *Guiding drug law reform in Myanmar: A legal analysis of the draft bill amending the 1993 Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Law*, https://www.tni.org/files/publication-downloads/legal_analysis_english_final_version.pdf
 66. Penal Reform International, Linklaters, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (2020), *Sentencing of women convicted of drug-related offences*, p. 112, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/02/Linklaters-PRI_Sentencing-of-women-convicted-of-drug-related-offences_WEB.pdf
 67. Uprimny, R., Esther, D. y Parra, J. (2012), *Addicted to punishment: The disproportionality of drug laws in Latin America* (Bogotá: Dejusticia y Centro de Estudios Drogas y Derecho), <https://www.dejusticia.org/wp-content/uploads/2018/03/ADDICTED-TO-PUNISHMENT-WP1.pdf>
 68. Eisen, L. (9 de junio de 2015), *Mandatory Minimum Sentences – Time to end Counterproductive Policy* (Brennan Centre for Justice), <https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/mandatory-minimum-sentences-time-end-counterproductive-policy>
 69. Consultar, entre otros: UN Committee on the Elimination of all forms of Racial Discrimination (2014), *Concluding observations on the combined seventh to ninth periodic reports of United States of America*, UN Doc. CERD/C/USA/CO/7-9, para. 20, https://tbinternet.ohchr.org/Treaties/CERD/Shared%20Documents/USA/CERD_C_USA_CO_7-9_18102_E.pdf; Hutt, D. (26 de julio de 2019), "The Bail Challenge in Southeast Asia", *The Diplomat*, <https://thediplomat.com/2019/07/the-bail-challenge-in-southeast-asia/>; Drug Policy Alliance (2015), *The Drug War, Mass Incarceration and Race*, https://www.ODDD.org/documents/ungass2016/Contributions/Civil/DrugPolicyAlliance/DPA_Fact_Sheet_Drug_War_Mass_Incarceration_and_Race_June2015.pdf
 70. DeCourcy, E. (2020), "The injustice of formal gender equality in sentencing", *Fordham Urb. L. J.* **47**(395), p. 408, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3557265
 71. Eisen, L. (9 de junio de 2015), *Mandatory Minimum Sentences – Time to end Counterproductive Policy* (Brennan Centre for Justice), <https://www.brennancenter.org/our-work/analysis-opinion/mandatory-minimum-sentences-time-end-counterproductive-policy>
 72. UN Working Group on Arbitrary Detention (2002), *Report of the Working Group on Arbitrary Detention in its visit to Mexico*, UN Doc. E/CN.4/2003/8/Add.3, para. 44. Disponible en: https://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=3409
 73. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (2015), *Study on the impact of the world drug problem on the enjoyment of human rights*, UN Doc. A/HRC/30/65, para. 44, <https://undocs.org/A/HRC/30/65>; Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2006), *Report of the Working Group on Arbitrary Detention: Mission to Nicaragua*, UN Doc. A/HRC/4/40/Add.3, para 64-65, https://ap.ohchr.org/documents/alldocs.aspx?doc_id=12740; Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2005), *Concluding Observations: Mauritius*, UN Doc. CCPR/CO/83/MUS, para. 15, https://tbinternet.ohchr.org/_layouts/15/treatybodyexternal/Download.aspx?symbolno=C-CPR/CO/83/MUS&Lang=en
 74. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas sobre Derechos Humanos (2018), *Implementation of the joint commitment to effectively addressing and countering the world problem with regard to human rights*, UN Doc. A/HRC/39/39, p. 91, <https://www.ohchr.org/EN/HRBodies/HRC/RegularSessions/Session39/Pages/ListReports.aspx>
 75. Gray, A. (2017), "Mandatory sentencing around the world and the need to reform", *New Criminal Review* **20**(391), p. 411, <https://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/bufcr20&div=19&id=&page=>
 76. Ibid., p. 412.
 77. ONUDD, ONUSIDA, OMS, ACNUDH (2020), *Declaración Conjunta de ONUDD, OMS, ONUSIDA y ACNUDH sobre COVID-19 en cárceles y otros centros de internamiento*, https://www.unaids.org/sites/default/files/20200513_PS_covid-prisons_en.pdf
 78. ONUDD (2020), *Position paper: COVID-19 preparedness and responses in prison*, https://www.ODDD.org/documents/hiv-aids/publications/ODDD_position_paper_COVID-19_in_prisons_-_FINAL.pdf
 79. Harm Reduction International (2020), *COVID-19, Prisons and Drug Policy: Global Scan March-June 2020*, https://www.hri.global/files/2020/07/10/HRI_-_Prison_and_Covid_briefing_final.pdf
 80. UK House of Commons (2020), *Human Rights and the Government's response to COVID-19: children whose mothers are in prison*, para. 14, <https://committees.parliament.uk/publications/1735/documents/16825/default/&sa=D&ust=1610032681538000&usg=AOvVaw30d6k7ioylr7DCow-jPStBn>
 81. Penal Reform International, Linklaters y Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (2020), *Sentencing of women convicted of drug-related offences*, p. 11, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/02/Linklaters-PRI_Sentencing-of-women-convicted-of-drug-related-offences_WEB.pdf
 82. Ibid, p. 22.
 83. DeCourcy, E. (2020), "The injustice of formal gender equality in sentencing", *Fordham Urb. L. J.* **47**(395), p. 410, https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3557265
 84. ONUDD (2019), *World Drug Report 2019*, p. 21, https://wdr.ODDD.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_1_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf
 85. Penal Reform International y Thailand Institute of Justice (2013), *Guidance Document on the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules)*, p. 35, <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/10/PRI-TIJ-Guidance-Documen-on-Bangkok-Rules-October-2013.pdf>
 86. ONUDD (2019), *World Drug Report 2019*, p. 21, https://wdr.ODDD.org/wdr2019/prelaunch/WDR19_Booklet_1_EXECUTIVE_SUMMARY.pdf
 87. Van der Meulen, E., De Shalit, A., y Ka Hon Chu, S. (2017), "A Legacy of Harm: Punitive Drug Policies and Women's Carceral Experiences in Canada", *Women y Criminal Justice* **28**(2), <https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/08974454.2017.1307160>
 88. ONUDD y UNAIDS (2008), *Women and HIV in prison set-*

- tings, p. 2, <https://www.ONUDD.org/documents/hiv-aids/Women%20and%20HIV%20in%20prison%20settings.pdf>
89. Herman, J. (2018), *Women's Prisons and Substance Abuse Treatment: A Systematic treatment: A Systematic review of Shame Interventions*, p. 16, https://sophia.stkate.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1844&context=msw_papers
 90. Ibid.
 91. Asamblea General de las Naciones Unidas (2016), *Outcome Document of the 2016 United Nations General Assembly Special Session on the World Drug Problem*, para. 1.(o), <https://www.ONUDD.org/documents/postungass2016/outcome/V1603301-E.pdf>
 92. UN Committee Against Torture (2018), *Concluding observations on the sixth periodic review on the Russian Federation*, UN Doc. CAT/C/RUS/CO/6, <https://undocs.org/en/CAT/C/RUS/CO/6>
 93. OMS (2007), *Health in prisons: A WHO guide to the essentials in prison health*, p. 52, https://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0009/99018/E90174.pdf
 94. Shirley-Beavan, S. et al. (2020), "Women and barriers to harm reduction services: a literature review and initial findings from a qualitative study in Barcelona, Spain", *Harm Reduction Journal*, <https://harmreductionjournal.biomed-central.com/articles/10.1186/s12954-020-00429-5>
 95. Harm Reduction International (2020), *The Global State of Harm Reduction 2020: Executive Summary*, p. 25, https://www.hri.global/files/2020/10/26/Global_State_HRI_2020_1_1_Global_Overview_FA_p16-17.pdf
 96. Ibid, p. 24.
 97. Shirley-Beavan, S. et al. (2020), "Women and barriers to harm reduction services: a literature review and initial findings from a qualitative study in Barcelona, Spain", *Harm Reduction Journal*, <https://harmreductionjournal.biomed-central.com/articles/10.1186/s12954-020-00429-5>
 98. Chuenurah, C. y Sornprohm, U. (2020), "Drug Policy and Women Prisoners in Southeast Asia", en: Buxton, J., Margo, G., y Burger, L. (Eds.), *The Impact of Global Drug Policy on Women: Shifting the Needle* (Emerald Publishing), <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-83982-882-920200019/full/html>
 99. Penal Reform International y Thailand Institute of Justice (2013), *Guidance Document on the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules)*, p. 54, <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/10/PRI-TIJ-Guidance-Documents-on-Bangkok-Rules-October-2013.pdf>
 100. Shirley-Beavan, S. et al. (2020), "Women and barriers to harm reduction services: a literature review and initial findings from a qualitative study in Barcelona, Spain", *Harm Reduction Journal*, <https://harmreductionjournal.biomed-central.com/articles/10.1186/s12954-020-00429-5>
 101. UN Committee on Economic, Social and Cultural Rights (2000), *General Comment No. 14: The Right to the Highest Attainable Standard of Health (Art. 12)*, Doc. UN Doc. E/C.12/2000/4, para. 8, <https://digitallibrary.un.org/record/425041?ln=en>
 102. Werb, D. et al. (2016), "The effectiveness of compulsory drug treatment: A systematic review", *International Journal of Drug Policy* **28**, <https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0955395915003588>
 103. European Commission (2016), *Study on alternatives to coercive sanctions as response to drug law offences and drug-related crime*, p. 38, https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/policies/organized-crime-and-human-trafficking/drug-control/eu-response-to-drugs/docs/acs_final_report_new_ec_template_en.pdf
 104. Ibid, p. 25.
 105. Ibid, p. 12.
 106. Ibid, p. 26.
 107. Guzmán, D.E. (2012), *Drug Courts: Scope and challenges of an alternative to incarceration* (Londres: Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas), p. 11, http://fileserv.idpc.net/library/IDPC-Briefing-paper_Drug-courts.pdf
 108. EQUIS Justicia para las Mujeres (2018), *Cortes de Drogas en México: Una crítica a partir de la experiencia de las mujeres*, https://equis.org.mx/wp-content/uploads/2018/10/Cortes_de_Drogas.pdf
 109. Lunze, K., et al. (2016), "Mandatory addiction treatment for people who use drugs: global health and human rights analysis", *BMJ* **353**:i2943, <https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27284009>
 110. Drug, Security and Democracy Program (2018), *Drug Courts in the Americas* (Nueva York: Social Science Research Council), p. 33, https://s3.amazonaws.com/ssrc-cdn1/crmu-plloads/new_publication_3/DSD_Drug+Courts_English_online+final.pdf
 111. Los datos provienen de: Safranoff, A. y Tiravassi, A. (2018), *Mujeres en contextos de encierro en América Latina: Características y factores de riesgo asociados a determinados comportamientos delictivos*. Banco Interamericano de Desarrollo, p. 13, <https://publications.iadb.org/es/publicacion/17375/mujeres-en-contextos-de-encierro-en-america-latina-caracteristicas-y-factores-de>
 112. Los datos provienen de: Cortázar, A. et al. (2015), *¿Qué pasa con los hijos de madres encarceladas? ¿Cómo amortiguar los efectos nocivos para los niños cuyos padres están privados de libertad* (Instituto de Políticas Públicas UDP), <https://www.camara.cl/pdf.aspx?prmlD=117002&prmlTIPO=DOCUMENTOCOMISION>
 113. Los datos provienen de: Cumbre Díaz, N., y Rodríguez Blanco, E. (2017), *Caracterización de las Personas Privadas de Libertad por Delitos de Drogas, con Enfoque Socio-Jurídico del Diferencial por Género en la Aplicación de Justicia Penal*, p. 11, <https://www.seguridadciudadana.gob.pa/wp-content/uploads/2017/06/Genero-Carcel-y-Droga.pdf>
 114. Centro de Estudios Legales y Sociales, Dejusticia, EQUIS Justicia para las Mujeres, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas y Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (2018), *Women deprived of liberty: Submission to the Working Group on the issue of discrimination against women in law and practice*, http://fileserv.idpc.net/library/OHCHR-WG-discriminations-against-women_Contribution_Sept-2018.pdf
 115. Chuenurah, C. y Sornprohm, U. (2020), "Drug Policy and Women Prisoners in Southeast Asia", en: Buxton, J., Margo, G., y Burger, L. (Eds.) (2020), *The Impact of Global Drug Policy on Women: Shifting the Needle* (Emerald Publishing), <https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/978-1-83982-882-920200019/full/html>
 116. Cerezo, A. (2016), "Women in Prison in Spain: The Implementation of the Bangkok Rules to the Spanish Prison Legislation", *European Journal on Criminal Policy and Research* **23**, <https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-016-9323-0>
 117. Cortes, E. (21 de agosto de 2013), "Drug law in reform in Costa Rica benefits vulnerable women and their families", Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, <https://idpc.net/blog/2013/08/drug-law-reform-in-costa-rica-benefits-vulnerable-women-and-their-families>
 118. Giacomello, C. et al. (2019), *Childhood that matters: The impact of drug policy on children with incarcerated parents in Latin America and the Caribbean*, p. 27, <http://www.cwslac.org/nnapes-pdd/docs/Regional-Study-Childhood-that-matters-web.pdf>

119. *Ibíd*, p. 31.
120. *Ibíd*.
121. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Dejusticia, Comisión Interamericana de Mujeres y Organización de Estados Americanos (2016), *Women, Incarceration, and drug policies: A Guide for Policy Reform in Latin America and the Caribbean*, p. 35, <http://fileserv.idpc.net/library/WOLA-WOMEN-FINAL-ver-25-02-1016.pdf>
122. Epstein, R. (2014), *Mothers in prison: The sentencing of mothers and the rights of the child* (The Howard League for Penal Reform), p. 3, https://howardleague.org/wp-content/uploads/2016/04/HLWP_3_2014.pdf
123. Asamblea General de las Naciones Unidas (2019), *Global study on children deprived of liberty: Note by the Secretary-General*, UN Doc. A/74/136, para. 49 y siguientes, <https://undocs.org/en/A/74/136>
124. Van Gundy, A. y Baumann-Grau, A. (2013), *Women, incarceration, and human rights violations: Feminist criminology and corrections* (Farnham: Ashgate Publishing).
125. Consultar, por ejemplo: American Civil Liberties Union (sitio web), *Pregnant women in prison*, <https://www.aclu.org/issues/prisoners-rights/women-prison/pregnant-women-prison> (Accessed 4 February 2021).
126. Consultar lista en: Penal Reform International y Thailand Institute of Justice (2013), *Guidance Document on the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules)*, p. 12, <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/10/PRI-TIJ-Guidance-Document-on-Bangkok-Rules-October-2013.pdf>.
127. Penal Reform International, Linklaters y Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas (2020), *Sentencing of women convicted of drug-related offences*, 8, https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2020/02/Linklaters-PRI_Sentencing-of-women-convicted-of-drug-related-offences_WEB.pdf.
128. Uprimny, R., Chaparro, S. y Cruz, L., (2017), *Delitos de drogas y sobredosis carcelaria en Colombia*, <https://www.dejusticia.org/publication/delitos-de-drogas-y-sobredosis-carcelaria-en-colombia>
129. Giacomello, C. y García Castro, T. (2020), *Presas en casa: Mujeres en arresto domiciliario en América Latina*, p. 9, <https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/07/Presas-en-Casa.pdf>
130. Gorter, B. (4 de noviembre de 2019), "Women in Cambodian prisons: The challenges of caring for their children", *Penal Reform International*, <https://www.penalreform.org/blog/women-in-cambodian-prisons-the-challenges-of-caring>
131. Centro de Estudios Legales y Sociales, Dejusticia, Elementa Derechos Humanos, EQUIS Justicia para las Mujeres, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Plataforma NNAPES y Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (2020), *Comentarios a solicitud de opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en materia de personas privadas de la libertad*, <http://fileserv.idpc.net/library/Observaciones-OC-Enfoques-diferenciados-en-materia-de-PPL-27112020.pdf>
132. Youngers, C., García Castro, T. y Manzur, M. (2020), *Women behind bars for drug offenses in Latin America*, (Washington: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), <https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/Final-Women-Behind-Bars-Report.pdf>
133. Giacomello, C. (2013), *Women, drug offenses and penitentiary systems in Latin America* (Londres: Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas), http://fileserv.idpc.net/library/IDPC-Briefing-Paper-Women-in-Latin-America_ENGLISH.pdf
134. Penal Reform International y Thailand Institute of Justice (2013), *Guidance Document on the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules)*, p. 37, <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/10/PRI-TIJ-Guidance-Document-on-Bangkok-Rules-October-2013.pdf>
135. García Castro, T. (22 de agosto de 2019), "Mujeres de las Américas que han estado en prisión conectan en el primer taller regional", Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, <https://www.wola.org/es/analisis/mujeres-que-han-estado-en-prision>
136. García Castro, T. y Santos, M. (2020), *Trans women deprived of liberty: Invisible stories behind bars* (Almas Cautivas, Casa de las Mujeres Tiresias, Casa Hogar Paola Buenrostro, Corpora en Libertad, Dejusticia, EQUIS Justicia para las Mujeres, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), p. 15, <https://idpc.net/publications/2020/04/trans-women-deprived-of-liberty-invisible-stories-behind-bars>
137. Dickson-Gomez, J. *et al.* (2011), "Access to housing subsidies, housing status, drug use and HIV risk among low-income U.S. urban residents", *Substance Abuse Treatment, Prevention and Policy* 6, <https://substanceabusepolicy.biomedcentral.com/articles/10.1186/1747-597X-6-31>
138. Ponder Williams, E. (2019), "Fair Housing's Drug Problem: Combatting the Racialized Impact of Drug-based Housing Exclusions Alongside Drug Law Reform", *Harvard Civil Rights-Civil Liberties Law Review* 54, p. 774, <https://harvardcrcl.org/wp-content/uploads/sites/10/2019/07/54.2-Williams.pdf>
139. Derdarian, K. (sin fecha), "Public housing ban on people with drug records likely to do more harm than good, research tells us", *The Conversation*, <https://theconversation.com/public-housing-ban-on-people-with-drug-records-likely-to-do-more-harm-than-good-research-tell-us-93731>
140. Pieris, N. (2017), *Costa Rica's inter-institutional network in support of women caught in the criminal justice system* (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Dejusticia y Comisión Interamericana de Mujeres), https://www.wola.org/wp-content/uploads/2017/05/DONE-3-Red-interinstitucional-Costa-Rica_ENG_FINAL-.pdf
141. García Castro, T. (2020), *Clean Start: Creating second chances for women and girls in Kenya* (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas y Dejusticia), http://fileserv.idpc.net/library/CleanStart_EN.pdf
142. Buhse, C. (2017), *Organizing for the incarcerated and their families: The case of ACIFaD in Argentina* (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Dejusticia y Comisión Interamericana de Mujeres), https://www.wola.org/wp-content/uploads/2017/05/DONE-6-ACIFAD_ENG_FINAL.pdf
143. Drug Policy Alliance (2011), *Drug Testing for TANF Recipients*, https://drugpolicy.org/sites/default/files/FactSheet_Drug%20Testing%20for%20TANF_Federal.pdf
144. Henriques-Gomes, L. (9 de setiembre de 2019), "The Commission wants to drug test welfare recipients. Here's why experts think it's a bad idea", *The Guardian*, <https://www.theguardian.com/australia-news/2019/sep/10/the-coalition-want-to-drug-test-welfare-recipients-heres-why-experts-think-its-a-bad-idea>.
145. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Dejusticia, Comisión Interamericana de Mujeres y Organización de Estados Americanos (2016), *Women, Incarceration, and*

- drug policies: A Guide for Policy Reform in Latin America and the Caribbean, <http://fileserv.idpc.net/library/WOLA-WOMEN-FINAL-ver-25-02-1016.pdf>.
146. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Dejusticia y Comisión Interamericana de Mujeres (2017), *Eliminating barriers to re-entry: Criminal record reform in Costa Rica*, https://mujeresydrogas.wola.org/wp-content/uploads/2017/12/DONE-14-Criminal-Records-in-CR_ENG_FINAL-1.pdf
 147. Buhse, C. y Schaffer, A. (2017), "Ban the Box": Reducing the harmful effects of criminal records in the United States, https://www.wola.org/wp-content/uploads/2017/05/DONE-11-Ban-the-Box_ENG_FINAL.pdf
 148. Amnistía Internacional (2019), *Fatally flawed: Why Malaysia must abolish the death penalty*, p. 17, <https://www.amnesty.org/download/Documents/ACT5010782019ENGLISH.pdf>
 149. Prison Reform Trust (2004), *Forgotten Prisoners: The Plight of Foreign National Prisoners in England and Wales*, <http://www.prisonreformtrust.org.uk/Portals/0/Documents/Forgotten%20prisoners%20-%20the%20plight%20of%20foreign%20national%20prisoners%20in%20england%20and%20wales.pdf>
 150. Matos, R. (2016), "Trajectories and identities of foreign national women: Rethinking prison through the lens of gender and citizenship", *Criminology y Criminal Justice* 16(3), <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1748895815603776>
 151. Cerezo, A. (2016), "Women in Prison in Spain: The Implementation of the Bangkok Rules to the Spanish Prison Legislation", *European Journal on Criminal Policy and Research* 23, <https://link.springer.com/article/10.1007/s10610-016-9323-0>
 152. Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Dejusticia, Comisión Interamericana de Mujeres y Organización de Estados Americanos (2016), *Women, Incarceration, and drug policies: A Guide for Policy Reform in Latin America and the Caribbean*, p. 3, <http://fileserv.idpc.net/library/WOLA-WOMEN-FINAL-ver-25-02-1016.pdf>
 153. Youngers, C., García Castro, T. y Manzur, M. (2020), *Women behind bars for drug offenses in Latin America*, (Washington: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos), <https://www.wola.org/wp-content/uploads/2020/11/Final-Women-Behind-Bars-Report.pdf>
 154. Fair, H. y Heard, C. (2019), *Pre-trial detention and its over-use: Evidence from ten countries*, (Birkbeck: Institute for Crime y Justice Policy Research), p. 19, https://prisonstudies.org/sites/default/files/resources/downloads/pre-trial_detention_final.pdf
 155. García Castro, T. (2019), *Pretrial detention in Latin America: The disproportionate impact on women deprived of liberty for drug offences* (Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas y Dejusticia), p. 7, http://fileserv.idpc.net/library/Pretrial-detention-in-Latin-America_June-2019.pdf
 156. Penal Reform International y Thailand Institute of Justice (2013), *Guidance Document on the United Nations Rules on the Treatment of Women Prisoners and Non-custodial Measures for Women Offenders (The Bangkok Rules)*, p. 43, <https://cdn.penalreform.org/wp-content/uploads/2013/10/PRI-TIJ-Guidance-Documents-on-Bangkok-Rules-October-2013.pdf>
 157. Hoyle, C. y Girelli, G. (2019), *The Death Penalty for Drug Offences: Foreign Nationals* (Harm Reduction international y University of Oxford Centre for Criminology), <https://www.hri.global/files/2019/03/12/death-penalty-foreign-nationals.pdf>
 158. ONUDD (2010), *The Bangkok Rules – United Nations Rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders with their commentary*, p. 41, https://www.onudd.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
 159. *Ibid.*
 160. Giacomello, C. et al. (2019), *Childhood that matters: The impact of drug policy on children with incarcerated parents in Latin America and the Caribbean*, p. 74, <http://www.cwslac.org/nnapes-pdd/docs/Regional-Study-Childhood-that-matters-web.pdf>
 161. Van Kempen, P., y Krabbe, M. (Eds.) (2017), *Women in Prison. The Bangkok Rules and Beyond/Femmes en prison. Les règles de Bangkok et au-delà* (Cambridge/Antwerp/Portland: Intersentia), p. 28.
 162. ONUDD (2010), *The Bangkok Rules – United Nations Rules for the treatment of women prisoners and non-custodial measures for women offenders with their commentary*, p. 41, https://www.onudd.org/documents/justice-and-prison-reform/Bangkok_Rules_ENG_22032015.pdf
 163. Human Rights Watch (2015), *A Price Too High: US Families Torn Apart by Deportations for Drug Offences*, <https://www.hrw.org/report/2015/06/16/price-too-high/us-families-torn-apart-deportations-drug-offenses>
 164. Matos, R. (2016), "Trajectories and identities of foreign national women: Rethinking prison through the lens of gender and citizenship", *Criminology y Criminal Justice* 16(3), <https://journals.sagepub.com/doi/abs/10.1177/1748895815603776>
 165. Ballesteros-Pena, A. (2020), "The Prison Trajectories of Foreign National Women in Spain: Intersections of Citizenship, Gender, Race, and Social Class", *Crit Crim* 28, <https://doi.org/10.1007/s10612-020-09516-2>
 166. Para obtener más información sobre alternativas al encarcelamiento con una perspectiva de género, consultar: Dejusticia, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas y Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (sin fecha), *Alternatives to incarceration for women involved in the drug market*, https://www.wola.org/sites/default/files/Alternatives%20to%20Incarceration_English_Final_0.pdf
 167. Para obtener más información, consultar: Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Dejusticia, Comisión Interamericana de Mujeres y Organización de Estados Americanos (2016), *Women, Incarceration, and drug policies: A Guide for Policy Reform in Latin America and the Caribbean*, p. 3, <http://fileserv.idpc.net/library/WOLA-WOMEN-FINAL-ver-25-02-1016.pdf>
 168. South African Network of People who Use Drugs, Metzineros y Harm Reduction International (2020), *Harm Reduction for Women in Prison*, https://www.hri.global/files/2020/06/10/Harm_Reduction_for_Women_in_Prison_2.pdf
 169. Las recomendaciones incluidas en esta sección son las siguientes: Centro de Estudios Legales y Sociales, Dejusticia, Elementa Derechos Humanos, EQUIS Justicia para las Mujeres, Consorcio Internacional sobre Políticas de Drogas, Plataforma NNAPES y Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos (2020), *Comentarios a Solicitud de Opinión Consultiva sobre enfoques diferenciados en materia de personas privadas de la libertad*, <http://fileserv.idpc.net/library/Observaciones-OC-Enfoques-diferenciados-en-materia-de-PPL-27112020.pdf>

Sobre este informe

Este informe analiza las formas concretas en que las leyes punitivas de drogas han supuesto un impedimento para la implementación de las Reglas de Bangkok desde su aprobación, en 2010. También ofrece varias recomendaciones para alinear las leyes y políticas de drogas con los compromisos establecidos en las Reglas de Bangkok.

International Drug Policy Consortium

61 Mansell Street
London, E1 8AN, United Kingdom

Teléfono: +44 (0) 20 7324 2975

Correo: contact@idpc.net

Página web: www.idpc.net

Sobre el IDPC

EL Consorcio Internacional de Políticas de Drogas (IDPC, por sus siglas en inglés), es una red global de organizaciones no gubernamentales especializadas en las cuestiones relacionadas con la producción y uso de las drogas ilegales. El Consorcio tiene por objeto promover debates abiertos y objetivos sobre la eficacia, dirección, y contenido de las políticas de drogas a nivel nacional e internacional, y apoya políticas basadas en la evidencia científica, y que son efectivas para la reducción de los daños relacionados con las drogas. El Consorcio produce informes y disemina las publicaciones de las organizaciones miembros, y ofrece recomendaciones expertas a responsables de políticas y autoridades públicas en todo el mundo.

© International Drug Policy Consortium Publication 2021

Informe diseñado por: Mathew Birch - whatifweconsulting.com

Foto en cubierta: Mujer privada de la libertad en la prisión de Choluteca, Honduras

Crédito: Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Francisco Proner / Farpa | Flickr Cidh | CC BY 2.0

Financiado, en parte, por:

